



La palma africana, **energizadora nacional del nuevo siglo**



Escuela de
Ciencias Humanas
Escuela de
Ciencias Humanas

Alvaro Almeyda Orozco

**Trabajo de grado presentado para optar por el grado en Periodismo y Opinión
Pública**

Alvaro Almeyda Orozco

La palma africana, encrucijada nacional del nuevo siglo

Colegio Mayor Nuestra Señora Del Rosario

Escuela de Ciencias Humanas

Programa de Periodismo y Opinión Pública

Bogotá, D.C.

2011

Tabla de contenido:

Prólogo	4
I - Contextualización del cultivo de palma y realidades actuales	7
II - De la contratación directa a las Alianzas Estratégicas	12
III - ¿Cultivo insignia o desastre a largo plazo?	17
IV - Implicaciones sociales, un secreto a voces	30
V - Del consumo interno a los incentivos de exportación	37
VI - El cultivo insignia del gobierno de Uribe	46
Bibliografía	51

Prólogo:

Este texto busca explorar las dimensiones que tiene el cultivo de la palma africana en Colombia desde todas las aristas (repercusiones a nivel social, económico, cultural y político) que afectan directa e indirectamente tanto a los productores y empresarios de la palma como a los consumidores finales, representados en este caso por la sociedad colombiana.

El presente reportaje busca reconstruir el panorama agrícola de Colombia que se vio reconfigurado durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), para así afrontar las dinámicas que están enmarcando un proceso que acaparará los titulares mediáticos y las políticas agrícolas de los próximos 20 años.

El cultivo de palma africana se extiende hoy en día a lo largo de 16 departamentos y 103 municipios de Colombia. Por ello se ha convertido en una parte fundamental de nuestra economía, ya que ha reconfigurado los espacios cultivables, generando repercusiones para las poblaciones locales, las industrias agrónomas, la economía nacional y las relaciones comerciales internacionales. Este cultivo se ha vuelto tan representativo que actualmente existen más de 360.000 mil hectáreas registradas ante el Ministerio de Agricultura, y de acuerdo declaraciones públicas que dio el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, la proyección para este cultivo es de un millón de hectáreas en los próximos años, cifra importante ya que, con el área de las plantaciones actuales, ostentamos la cuarta posición como productores a nivel mundial.

Este panorama se ha configurado a causa del viraje de la política agropecuaria del país hacia el posicionamiento como líderes mundiales en la producción de palma. Dicho propósito tuvo su principal aliado en el ex-mandatario presidencial Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), cuyo gobierno fue promotor de un auge sin precedentes en la proliferación del cultivo de palma, por el que se triplicó el porcentaje de cultivos en el país en tan solo ocho años.

Pero este cultivo no sólo representa un nuevo panorama agrícola para el país y los campesinos, sino que se ha visto envuelto en unas dinámicas de corrupción, violencia y desarraigo. Así cómo el fruto de su planta que comienza en un verde marcado por las hojas y a través de su crecimiento permite vislumbrar el negro del tallo para finalizar en un fruto que es característico por su fulgurante rojo, de la misma forma el cultivo de la palma y sus repercusiones en la sociedad ha tomado varios matices con

las comunidades, que en muchos casos ha tenido un desenlace violento tiñendo de sangre los ríos y sembrados aledaños a estos cultivos.

La relación mediática extensamente retratada de este cultivo está enmarcada en la controversia que se produjo con la adjudicación de los subsidios de Agro Ingreso Seguro (AIS), cuando el Ministerio de Agricultura otorgó dineros a empresarios de la palma indiscriminadamente, y cómo se ha retratado en las investigaciones, según las cuales dichas asignaciones fueron hechas “a dedo”. En medio de este escándalo no sólo cayeron los empresarios que engañaron al programa y que en algunos casos fueron injustamente retribuidos con dineros, sino que también han sucumbido ante el peso de la opinión pública y ante la justicia los funcionarios que hicieron parte de este programa, llegando esta espiral de corrupción hasta el mismo ex-ministro de agricultura Andrés Felipe Arias, quien de la mano del ex presidente fomentó efusivamente la extensión del cultivo de la palma en el país.

Pero la palma africana no sólo genera cuestionamientos políticos y de orden económico; las implicaciones medioambientales se han convertido en uno de los principales argumentos para ir en contra de estos proyectos agroindustriales. Innumerables organizaciones no gubernamentales denuncian cómo elementos dañinos para el ecosistema intervienen en estos cultivos, denuncian además que el impacto recae finalmente en los pobladores y campesinos que conviven día a día con esta planta sufriendo problemas de salud. También se ha denunciado públicamente que los empresarios garantizan la compra de los productos finales del cultivo, pero lo hacen mediante figuras jurídicas contractuales que desfavorecen a los campesinos, evitan la contratación directa y no les pagan prestaciones ni seguridad social.

Otro problema que es motivo de estudio relacionado a la palma es aquél que tiene que ver con el consumo excesivo de agua para la irrigación de la misma, que, bajo los planes de Uribe de volver a Colombia “la Arabia Saudita de la palma”, consistiría en el consumo diario del agua que utilizan diariamente países como Italia, Francia o Inglaterra.

Según algunos ambientalistas, lo anterior resulta preocupante por la creciente necesidad estadounidense de reproducir y condicionar cultivos de este tipo, evitando de esta forma incentivar la producción de palma en su propio territorio. Actualmente, con la firma del tratado de libre comercio con este país, entramos en una dinámica de profusión del cultivo siendo este subsidiado, además de estipularse una condición en el TLC para incrementar este tipo de cultivos.

Sumado a los anteriores problemas que se ven reflejados a lo largo de este texto, tenemos además una problemática que es fundamental para entender las dinámicas del cultivo de palma como producto a largo plazo, y que ha generado repercusiones en materia de comercio exterior y las políticas de incentivos hacia la palma. El Fondo de Estabilización de Precios (FEP), una iniciativa nacida a partir de la apertura económica para posicionar los insumos de la palma como producto de exportación, cuyo fin es regular los precios del mercado interno, se ha visto envuelto en una lucha por parte de los consumidores nacionales contra las empresas productoras, que buscan su disolución.

Esta figura u organismo representa actualmente la problemática más importante en relación al cultivo de la palma (por fuera de las violaciones a derechos humanos), ya que está direccionando la voluntad de los productores de seguir o no en este negocio y de las empresas que utilizan estos insumos a nivel nacional para preferir importar su materia prima o seguir utilizando la producción nacional. El problema en este caso radica en la situación ilógica que se presenta dado que se exportan los insumos de palma y se venden a mejor precio en el mercado internacional gracias a los incentivos fiscales, mientras que la industria nacional que utiliza esos productos que son exportados se ve en la necesidad de importarlos debido a los altos costos para el mercado interno; esto es casi como si tuviéramos que vender el café colombiano en el exterior y el que consumiéramos en nuestros hogares fuera brasilero.

Este trabajo se presenta a manera de 6 entregas en las cuales se trata cada una de las problemáticas más relevantes para el cultivo de la palma y sus repercusiones para la sociedad colombiana, así:

- La primera entrega hace una introducción al cultivo de la palma y su desarrollo desde sus inicios en suelo colombiano.
- La segunda entrega trata sobre las problemáticas laborales que suscita este cultivo.
- La tercera entrega se refiere a la problemática de medio ambiente.
- La cuarta entrega hace referencia al problema social que involucra la violencia.
- La quinta entrega trata sobre las implicaciones comerciales y de desarrollo en el comercio exterior.
- La sexta y última entrega hace referencia al desarrollo del cultivo a través del mandato de Álvaro Uribe.

I



INTRODUCCIÓN

Contextualización del cultivo de palma y realidades actuales

Sumario:

Esta primera entrega busca hacer un breve recuento de la introducción del cultivo de la palma africana en Colombia y su posterior desarrollo y expansión auspiciado por políticas agrarias y de incentivos tributarios, tanto como la creación y apoyo de instituciones directa o indirectamente enfocadas a ayudar con la proliferación que ha dado campo a la actual extensión del cultivo. De la misma forma se exponen los principales usos industriales y comerciales que tiene la materia prima y se identifican unos primeros factores de controversia al respecto teniendo en cuenta las posiciones de promotores y críticos.

La palma africana fue introducida en Colombia hacia 1932 en el mandato presidencial de Enrique Olaya Herrera, pero el desarrollo comercial del cultivo se inició a finales de los años cincuenta y comienzos de los sesenta durante los gobiernos de Alberto Lleras Camargo y Guillermo León Valencia.

En esta década se dieron incentivos de fomento a la agricultura comercial para productos como el algodón y algunas oleaginosas, plantas de cuya semilla o fruto puede extraerse aceite, entre ellas la palma africana. La medida estaba enmarcada en la política de proteccionismo de Estado y sustitución de importaciones puesta en práctica por estos gobiernos para contrarrestar la crisis económica internacional del momento. La intención del Estado era suplir las demandas internas de consumo de bienes agropecuarios y de esta forma blindar la economía para reducir las importaciones.

En 1959 se aprobó la Ley 26 que ordenaba a la banca destinar 15% de sus depósitos para el fomento de la agricultura, la ganadería y la pesca, estableciendo líneas de crédito para algunos cultivos de rendimiento tardío como la palma africana. En el año 1962 se funda la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma), fecha que coincide con la presentación del *Proyecto de colonización con base en plantaciones de palma africana*, por parte del antiguo Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora).

A mediados de la década del sesenta ya existían 18.000 hectáreas en producción en los departamentos del Cesar, Magdalena, Santander y Norte de Santander. El Incora publicó su *Plan de Desarrollo Económico y Social*, donde estipuló claramente el interés por este cultivo: “La palma africana se ha escogido como el principal cultivo oleaginoso que se debe impulsar en Colombia, entre otras razones por

sus halagadores rendimientos de aceite, la gran disponibilidad de tierras tropicales propicias para el cultivo y el impulso inicial que ya está tomando”.

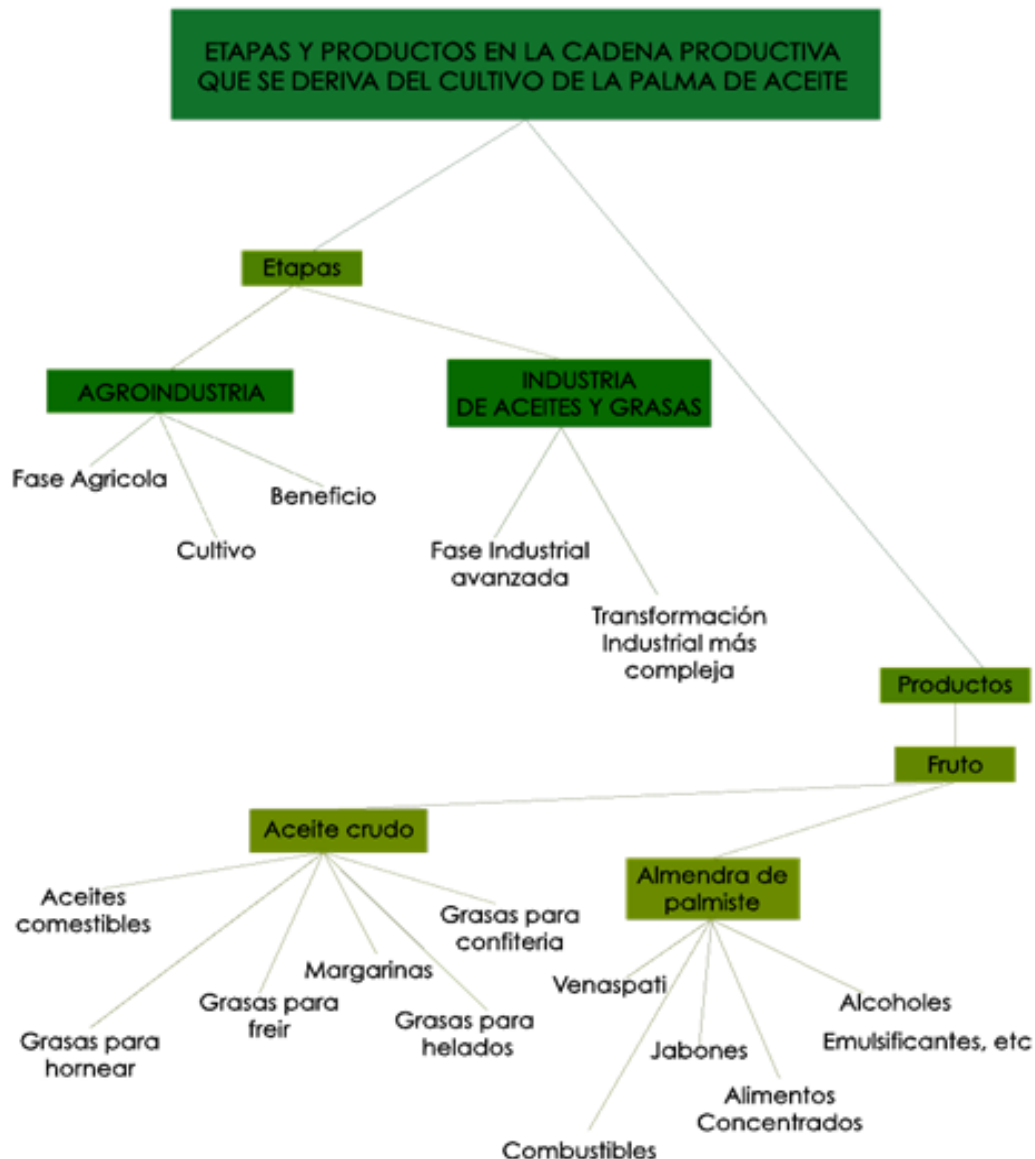
El carácter proteccionista de las políticas comerciales que levantaron altas barreras al comercio y a la inversión extranjera brindaron también una especial protección a la agricultura, en especial al desarrollo de cultivos como el de la palma, producto que contaba con un impuesto de importación del 40% sobre su valor comercial.

Posteriormente, con el mandato de Virgilio Barco se introdujeron las dinámicas de la apertura comercial que en 1990 configuraron un nuevo modelo de desarrollo de la economía enfocado hacia las exportaciones de productos no tradicionales como la palma.

Gracias a estas medidas los cultivos se expandieron a otros departamentos y, según datos publicados en 1995 por Fedepalma, en ese año ya sumaban alrededor de 130.000 hectáreas, siendo el principal cultivo de oleaginosas del país, fundamentalmente en las zonas Norte, Central y Oriental.

Actualmente los cultivos de palma africana se extienden a lo largo de 16 departamentos y 103 municipios. Según declaraciones públicas del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, la proyección para este cultivo es de un millón de hectáreas en los próximos años, y el presidente ejecutivo de Fedepalma, Jens Mesa, asegura que el territorio colombiano está dispuesto para alcanzar los 3 millones de hectáreas sembradas en un futuro cercano, tamaño equivalente al departamento de Santander.

La palma africana tiene dos productos principales que se extraen de las almendras: el aceite de palmiste y la torta de palmiste, que sirve para alimento animal. Al someter el aceite de palma a temperaturas extremas mediante un proceso industrial, se obtienen también dos productos en lo que se conoce como fraccionamiento: la oleína y la estearina de palma. La primera es líquida en climas cálidos y se puede mezclar con cualquier aceite vegetal. La segunda es la fracción más sólida y sirve para producir grasas, principalmente margarinas y jabones.



En términos de beneficio, la palma africana es un cultivo de tardío rendimiento. La recolección de su producto sólo puede darse después de tres años, tiempo en el cual sólo se generan costos asumidos por el productor, sin recibir utilidades. Sin embargo, la palma tiene una vida útil de 20 a 25 años durante la cual la explotación es constante, lo que ayuda a la recuperación del capital y a generar unas utilidades que exceden en gran cuantía lo invertido inicialmente. Una hectárea de cultivo produce en promedio 4 toneladas de aceite crudo de palma al año, y cada tonelada se vende entre 1 millón 800 mil pesos y 2 millones 200 mil pesos, actualmente.

Aunque el país ha encontrado en la palma un nuevo recurso que aporta al crecimiento económico, existen muchas voces que critican los efectos y desestiman las

bondades del cultivo intensivo. Factores como el paulatino deterioro del medio ambiente y las manifestaciones violentas por apropiación de tierras, son problemas íntimamente ligados al desarrollo de la palma que afectan a las poblaciones de las regiones donde ha aumentado el cultivo. Como lo expone Efraín Jaramillo, de la ONG Jenzera, una iniciativa que busca que indígenas, campesinos y afros encuentren canales para organizarse y poder defender sus territorios, “la afectación ha sido a nivel cultural y a nivel económico, este negocio ha sido nefasto para las organizaciones sociales”.

Ante esta denuncia, las entidades del gobierno catalogan este cultivo como una iniciativa que promueve a largo plazo el desarrollo agropecuario del país, y desde el punto de vista del Estado, el cultivo de la palma se enmarca como una oportunidad de negocio ante las necesidades actuales de biodiesel en el mundo: la necesidad de suplir la demanda de combustibles requeridos por Norteamérica y Europa, que están ratificando cada vez más leyes que incentivan el uso de agro combustibles en contraposición de combustibles fósiles como el carbón y la gasolina.

II



De la contratación directa a las Alianzas Estratégicas

Sumario:

Esta entrega busca caracterizar las dinámicas laborales que rodean la explotación en términos de mano de obra relacionados con el cultivo de la palma africana. En este caso se contraponen las posiciones de los empresarios, el gremio de los palmeros y las organizaciones no gubernamentales que se encuentran enfrascados en una disyuntiva al respecto de los modelos de contratación que para unos involucra un apoyo de valor en infraestructura y tecnología y para los otros se presenta en términos de falencias en el bienestar social de los trabajadores.

Una de las principales razones que el gobierno presenta para justificar el incesante cultivo de palma africana, es la necesidad de darle al país un crecimiento rápido y sostenible que permita la reducción de la pobreza. Sin embargo, el crecimiento económico producto del cultivo de la palma, no necesariamente se ve reflejado en la disminución de la inequidad social, como indica Paula Álvarez, una de las coordinadoras del Grupo Semillas, una ONG ambiental que ha criticado la siembra de la palma en el país: “La industria de palma empeora, terceriza y subcontrata a los trabajadores de igual forma que el campesino asume los riesgos y los futuros problemas del cultivo”. Para esta investigadora es importante resaltar el impacto que el empleo de palma genera en el campo, ya que elimina las economías familiares, donde los cultivos se realizan para suplir necesidades alimentarias y todos los integrantes de la familia participan.

Un cultivo como la palma, que exige cerca de 5.000 hectáreas para que sus rendimientos sean óptimos, excluye a pequeños productores y campesinos. Como se evidencia en el censo palmero de 1997-1998, las extensiones de pequeños productores sólo alcanzaban el 3.7% de las siembras totales de palma. No obstante, la modificación de procesos de cultivo mediante la unión de campesinos con pequeñas parcelas que se asociaron a empresarios agroindustriales, llamadas Alianzas Estratégicas (AE), en las que los primeros reciben especialización tecnológica y logística, ha sido una manera de menguar los efectos negativos que se presentan al explotar pequeñas parcelas sin apoyo técnico. Las últimas cifras del Ministerio de Agricultura indican que el 30% de los cultivos pertenecen a pequeños y medianos productores. Andrés Castro, coordinador del área de Responsabilidad Social de Fedepalma, afirma que este es un negocio inclusivo, donde tanto las empresas como los pequeños productores ganan, ya que por un lado las

extractoras garantizan el flujo de producción, y los cultivadores tienen apoyo técnico y logístico además de una garantía de compra. Según Castro, existen actualmente 65.000 hectáreas comprometidas en AE que involucran entre 110 y 115 alianzas que integran a 18 empresas y más de 5.000 campesinos.

Sin embargo, las alianzas estratégicas también tienen algunas críticas: miembros del Grupo Semillas han denunciado públicamente que los empresarios buscan con las AE garantizar una oferta de materia prima permanente, eliminando las relaciones contractuales con los terratenientes que manejan la producción y comercialización; dejando así en peores condiciones a los campesinos.

Según Álvarez, las empresas han logrado una situación excepcional al no tener que incurrir en el costo de la tierra y los impuestos, reducir sustancialmente los salarios y eliminar el pago de prestaciones sociales, debido a que las AE permiten que estos rubros recaigan en los propietarios y campesinos. Esto significa que aunque las empresas les garantizan a éstos la compra de los productos finales, no los contratan oficialmente y no les pagan prestaciones y seguridad social. De igual forma, al no comprar el terreno, los problemas que puedan surgir sobre los cultivos recaen en los campesinos. Sumado a esto, la investigadora explica que los créditos están atados al cultivo único de la palma, las condiciones laborales son inhumanas y debido al uso de sus tierras para este cultivo se va en contra de la seguridad alimentaria.

Como explican en el artículo *El agronegocio de la Palma Aceitera en Colombia. ¿Desarrollo para las poblaciones locales o una crónica para el desastre?* del número 34 de la revista del Grupo Semillas: “En Colombia, la RSE (Responsabilidad social empresarial) en la actividad palmera es efímera. Este sistema productivo no genera empleo estable, no tiene una remuneración fija ni condiciones dignas de vida y de trabajo. Las estructuras empresariales del sector palmero no permiten la afiliación a la seguridad social en salud, riesgos profesionales y pensiones, y mucho menos el acceso a los beneficios de salud ocupacional y seguridad industrial y la inestabilidad laboral”.

Ante estas denuncias, Andrés Castro (Fedepalma) indica que, por el contrario, las AE sí tienen en cuenta estas condiciones. Castro afirma que el 62% de los 5.000 cultivadores adheridos a estas alianzas pertenecen al régimen contributivo y el 27% al régimen subsidiado. En materia de seguridad alimentaria asegura que los cultivadores tienen la opción de destinar 30% de sus tierras para el cultivo de comida y ganado, y que de las 65.000 hectáreas que integran este modelo, el 90% cumple con este requisito. Según Castro es evidente que estas medidas se cumplen teniendo en cuenta que están

supervisadas por entidades como USAID (Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional), que a través de su programa MIDAS (Más Inversión para el Desarrollo Alternativo Sostenible) ha entregado más de 18 millones de dólares para las alianzas, y asegura que sólo el 20 % no son exitosas.

Otro detractor de las alianzas es el investigador de la Escuela Nacional Sindical, Ricardo Aricada, quien explica que a través de las alianzas productivas, las empresas incorporan al trabajador como socio, lo que le permite a la empresa contar con una oferta de materia prima permanente, sin tener ninguna vinculación laboral con los trabajadores. “En síntesis, es un negocio redondo en donde los propietarios de la tierra ponen la mano de obra barata, sin prestaciones sociales, ni horas extras, liquidaciones, jubilación, etc.; y la empresa controla todos los procesos de elaboración y comercialización y distribución de ganancias o pérdidas”, explicó Aricada, en el documento *Las Cooperativas de Trabajo Asociado en la agroindustria de la palma aceitera: Desierto verde y ruina laboral*.

Aricada insiste en su texto en que la sociedad asume el costo ambiental de la explotación de palma, mientras las empresas se apropian de los beneficios. En este caso se enmarca la crítica a las AE donde se observa que, aunque en cierto caso se proyecta como un beneficio inmediato a cultivadores y se mantiene un acuerdo de la compra de los cultivos hasta su finalización, no se tiene en cuenta el impacto final de estos cultivos, que después de su periodo útil de vida dejan la tierra erosionada e inhabilitada para producir otro tipo de cultivos.

De esta forma los campesinos que sobreviven a través del sustento de la palma obtienen rendimientos durante 20 o 25 años, pero cuando éste termina se ven desprotegidos por los mismos acuerdos que les han traído beneficios. En este caso, al finalizar un cultivo, los pequeños agricultores no poseen la capacidad para adquirir nuevos terrenos ni de adaptar los que tienen para sus necesidades futuras. En un contexto económico del “día a día” donde se han consumido lo producido anualmente, sin algún tipo de ahorro, y teniendo en cuenta que estos contratos obvian las necesidades pensionales de los campesinos, el resultado es un grupo de personas sin una pensión para subsistir, sin terrenos para cultivar y sin ahorros para sobrevivir, según han denunciado los ambientalistas.

Sumado a esto se tienen además las denuncias realizadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que ha caracterizado las condiciones de trabajo en las

plantaciones de palma como las más duras, y ha señalado que se encuentran entre el tipo de trabajadores más explotados y con mayor índice de pobreza.

Sin embargo, existen argumentos que aseguran que el cultivo no produce daño ecológico ni perjudica a los campesinos y tiene un potencial inexplorado en territorios que son subutilizados o que se dedican a otras empresas menos productivas.

Según estadísticas de Fedepalma, la existencia de tierras para usos agrícolas en Colombia oscila entre 22 y 28 millones de hectáreas de las cuales actualmente sólo se utilizan 5 millones, dejando una brecha de tierras que no están siendo aprovechadas correctamente para su producción.

El ex-ministro de Minas y Energía, Hernán Martínez Torres, expuso cómo Colombia podía ser ejemplo en materia de biocombustibles producidos a través de insumos como la caña de azúcar y la palma de aceite. Según Martínez, Colombia posee 42 millones de hectáreas dedicadas a pastos, de las cuales un área 6.5 millones de hectáreas es desaprovechada por el ganado, ya que se utilizan predios extensos donde se colocan pocas reses inhabilitando el terreno por la falta de eficiencia; estas podrían utilizarse para plantaciones de palma africana sin arremeter de esta forma contra las selvas y bosques y así no incurrir en la deforestación. Colombia es un país que posee una gran extensión de terrenos en sus regiones tropicales y subtropicales, que se ven subutilizados por el manejo de ganado extensivo y pastoreo que son perjudiciales para los cultivos permanentes.

Estas circunstancias muestran por qué la palma africana se ve por parte de sus detractores como un símbolo del afán de lucro, de la insensibilidad ambiental y del desmedro de las poblaciones marginales, en contraposición a la opinión oficial del gobierno, que tiene en la palma la visión agropecuaria que necesita el país.

La realidad en este caso se encuentra en una delgada línea gris. Sí existen modelos funcionales de palma; de igual manera existen incontables casos de campesinos que se ven perjudicados por esta modalidad de contratación, y de igual manera existe una oferta de tierra mal utilizada que podría ser aprovechada para efectos de monocultivos. El problema radica en observar esta situación en conjunto, lo cual en este momento, desfavorablemente para el gobierno y los empresarios de la palma, deja saldos negativos en su contra.

III



¿Cultivo insignia o desastre a largo plazo?

Sumario:

La presente entrega expone detalladamente las deficiencias ambientales que han sido retratadas tanto a nivel nacional como internacional en cuanto se refiere a las afectaciones de carácter estructural para un ecosistema como de una población local, que han sido extensamente estudiadas alrededor de los efectos naturales que produce el monocultivo de la palma africana, cuando es extendida en un territorio que originalmente no posee este cultivo. De manera particular se refiere a los efectos en el equilibrio natural de un espacio con relación a su fauna y flora originales, el consumo de recursos hídricos, el uso de fertilizantes e insecticidas y la desviación de necesidades en cultivos alimentarios. Por el otro lado se evalúa la viabilidad de la producción y utilización de biocombustibles como un posible sustituto a los combustibles fósiles de igual manera teniendo en cuenta los recursos necesarios para su elaboración y su efecto final en la implementación práctica.

Uno de los principales problemas que se escuchan cuando se habla de la palma tiene que ver con las repercusiones medioambientales que compromete este cultivo. Diferentes voces protestan por los efectos que involucra en materia de sostenibilidad, de afectación a ecosistemas, seguridad alimentaria y consumo de agua. Este tipo de repercusiones han sido ampliamente documentadas en países como Malasia e Indonesia, donde se han realizado investigaciones acerca de las repercusiones y efectos ambientales durante décadas.

Para poder entender las dinámicas del cultivo de palma africana, se deben introducir tanto las ventajas como las críticas que suscita este cultivo. En primera medida están las repercusiones medio ambientales que han sido ampliamente estudiadas en escenarios como el de Malasia e Indonesia donde se han evidenciado los efectos negativos que se presentan en el entorno natural después de una siembra a largo plazo.

En el caso de Colombia, Libia Grueso Castelblanco, activista por más de 20 años del Proceso de Comunidades Negras (PCN), menciona diferentes zonas del Pacífico, Nariño y Urabá chocoano donde proyectos agroindustriales “han afectado los ecosistemas, se ha producido escasez de alimentos, se ha menguado la fauna de cacería, donde el río ha sufrido y se ha acidificado el terreno”. Uno de los ejemplos que Grueso recuerda es la crisis del río Mira, donde las comunidades ya no consiguen peces, que han sido erradicados gracias al impacto de las plantaciones de palma.

Para la activista es claro que en el caso del Pacífico, la tierra no aguanta un cultivo de tardío rendimiento y, como ella explica, “a los palmeros les ha ido mal en esta zona y por eso se han tenido que ir a otros lados como la Orinoquía y los Llanos”.

Grueso recuerda haber visto a varias familias que habían subsistido a partir de la pesca perder su sustento y su oficio. Esta ambientalista ha tenido que presenciar familias enteras movilizándose y abandonando sus terrenos ancestrales, donde sus antepasados sentaron las bases de su independencia y libertad, debido a la escasez de alimento, lo cual fue un directo catalizador de la violencia en la zona y el aprovechamiento hostil de empresarios y grupos armados para ocupar sus terrenos.

Otro de los principales argumentos en contra de los monocultivos de palma africana es la necesidad de talar bosques para generar espacios de cultivo. Este problema afecta directamente a las comunidades aledañas, ya que al ser un producto que tiene una vida de 20 a 25 años de producción, cuando este termina, la tierra se encuentra erosionada y los animales y plantas a su alrededor se han menguado. Además, al no ser una planta nativa, la palma exige el continuo uso de insecticidas y fertilizantes sintéticos para erradicar plagas y mejorar la producción, contaminando el agua y el aire alrededor.

Un ejemplo de estos químicos para controlar plagas es el *Roundup*, que ha sido denunciado por varias ONG del medio ambiente como el WRM (Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales) por su contenido de glifosato. Este elemento químico, que también ha generado controversia por su particular uso en la erradicación de cultivos ilícitos, es señalado por varias investigaciones académicas de afectar la salud de las personas con las que tiene contacto por la cercanía de sus viviendas, como de los trabajadores que se encargan de la aspersión de los mismos.

En un estudio publicado por el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt se afirma que "es importante recordar que las plantaciones de palma no son bosques, son ecosistemas uniformes que sustituyen los ecosistemas naturales y su biodiversidad. Esto usualmente resulta en impactos sociales y ambientales negativos: decrece la producción de agua, se modifica la estructura y composición de los suelos, se altera la abundancia y composición de especies de fauna y flora, se pierde la base del sustento de la población nativa y en algunos casos se produce el desplazamiento de las comunidades negras, indígenas y campesinas de la zona". Algunos ejemplos ya se han documentado, como es el caso de "la zona palmera occidental (Municipio de Tumaco), en donde la destrucción del bosque primario ha estado asociada, en muchos casos, al establecimiento del cultivo de la palma. Y como es

sabido, una de las principales causas para que especies de fauna ingresen a alguna de las categorías superiores de amenaza, es la destrucción de los hábitats que las soportan".

Tatiana Roa, Coordinadora de Proyectos y responsable del tema energético en el Centro Nacional Salud Ambiente y Trabajo (CENSAT), es una de las detractoras del modelo de cambio climático y apoyo ambiental a través del cultivo de palma, el cual estipula que la producción de monóxido de carbono disminuye a partir del uso de biocombustibles. Roa explica que este cultivo es altamente consumidor de energía. La funcionaria de CENSAT aduce que el cultivo ha generado disputas por el uso del agua y que es falso que se resuelva la crisis climática. Roa indica que el balance energético es el mismo tanto con combustibles fósiles como con agrocombustibles, por el impacto que estos generan durante su producción y plantación. "La palma trae pérdida de biodiversidad, extinción de las especies nativas y agotamientos acuíferos", señaló la funcionaria.

Es fundamental resaltar que este cultivo no sólo consume las fuentes de agua, ya sean ríos, riachuelos o quebradas, etc., sino que también afectan los cultivos aledaños o de otras zonas que dependen de las mismas fuentes de agua ya que se desvían los cauces para mantener la palma, según explica Roa. Sumado a esto también está la repercusión del sedimento que dejan los pesticidas, que terminan llegando por medio de estas plantas a contaminar los mismos ríos y quebradas que le brindan el sustento. Además, si se tiene la construcción de vías de acceso hacia las plantas extractoras que producen el aceite de palmiste final, las cuales consumen recursos ecológicos e imprimen un peso a la zona por el número de trabajadores externos que son necesarios para el procesamiento de la materia prima, se puede evidenciar el impacto que imprimen los modelos de extracción de este cultivo.

De igual manera, la mayoría de activistas del medio ambiente, de CENSAT y Grupo Semillas, aclaran que otra crítica que se le endilga al cultivo de palma africana tiene que ver con la conversión de los bosques nativos donde la biodiversidad se ve disminuida, ya que al sustituir la flora original, los animales que tienen sus nichos constituidos son desplazados, y otras plantas dependientes del equilibrio natural de la zona mueren. Además, el impacto de los abonos y fertilizantes en los suelos y el consumo intenso de las fuentes de agua contribuyen a expulsar de esta forma otras especies adaptadas a las condiciones nativas del terreno.

A los problemas anteriormente mencionados se suma la producción de gases de efecto invernadero. Si se tienen en cuenta los valores de la Encuesta Nacional

Agropecuaria y se comparan con las estadísticas y análisis de Fedepalma, además de observaciones y apreciaciones de personas relacionadas con el sector, se entiende que los problemas ambientales antes mencionados tienen un menor impacto si se comparan con los causados por la ganadería extensiva. En este caso se hace referencia a la producción de gases de efecto invernadero por parte de los animales, su digestión, y destrucción de suelos. Sin embargo, Tatiana Roa denuncia los problemas de deforestación en el Pacífico, específicamente en el municipio caucano de Guapí, al señalar que “grandes selvas han sido destruidas para sembrar palma aceitera”.

Este mismo panorama se ha repetido en diferentes zonas del departamento del Chocó donde se ha deforestado extensivamente para promover estos cultivos, lo cual ha causado que muchas de las poblaciones nativas se vean obligados a reubicarse debido a la destrucción del hábitat de los animales que generalmente consumen y la pérdida de los árboles que proveen los frutos de su sostenimiento. Las comunidades negras e indígenas que habitaban estos territorios se han visto forzadas a criar a sus hijos en entornos donde los peces ya no nadan en los ríos y donde los pájaros ya no cantan en la mañanas; los lamentos de los abuelos son el único recordatorio que tienen los jóvenes de que en un pasado no muy lejano, ellos fueron dueños de un paraíso diverso de colores y sabores que hoy han sido reemplazados por los troncos negros del árbol y el rojo intenso de las almendras de palma.

Sin embargo, María del Mar Maldonado, ingeniera ambiental de Ingenios Manuelita, una empresa que tiene cultivos en Meta y que está desarrollando nuevos cultivos en Casanare, explica que aunque es claro que los monocultivos tienen un impacto en la biodiversidad de un territorio, no todos sus procesos son malos. Para Maldonado, la realidad es que empresas como Manuelita colaboran al medio ambiente por medio de la reutilización de productos industriales como abono en el campo, uso de fibras de la palma como combustibles para las calderas, la utilización de lodos como abono y las iniciativas de proyectos de compostaje para mejorar las condiciones del suelo. Además, Maldonado explica que desde 1998 se está realizando un monitoreo del impacto de los cultivos en el suelo y se han instituido zonas de protección en los suelos renovables cuando un terreno cumple su ciclo productivo.

La ingeniera de Manuelita cita una investigación (aún no publicada) realizada de la mano de Fedepalma y Cenipalma, en la que se asegura que han observado que los efectos del cultivo de biocombustibles han tenido balances positivos en relación a los gases de efecto invernadero. También asegura que las prácticas industriales están

avanzando en el menor uso de fertilizantes e insecticidas y explica que el riego por goteo es otra forma de no desperdiciar agua y utilizar este recurso solamente en cantidades necesarias. Maldonado asegura que en el caso del departamento del Meta, el agua no es el problema fundamental del cultivo ya que este territorio tiene nueve meses de lluvia, lo que les permite canalizar este recurso e incluso los obliga a invertir en sistemas de drenaje más que en sistemas de riego. La ingeniera expone que el verdadero impacto ambiental de la zona radica en la caza de animales, tanto para alimentación, como para tráfico o deporte. Explica que durante la primera parte del año, cuando se generan los picos de producción de palma, la empresa genera una mayor demanda de trabajo y que esos trabajadores que llegan de distintos lugares del país, debido a que no son naturales de la zona y no tienen sentido de pertenencia, acaban con la diversidad en fauna como es el caso de las lapas, chigüiros e iguanas.

Del oro negro al oro verde

Otro proceso intrínsecamente relacionado con la producción de palma, que debe ser tenido en cuenta para la caracterización de la problemática ambiental, es la producción de biocombustibles, y cómo estos son determinantes en la visión de país que se ha construido a partir de la justificación de estos cultivos.

En Colombia, la producción de combustibles a partir de la agricultura se basa básicamente en dos cultivos: caña de azúcar de la que se extrae etanol para mezclarlo con gasolina, y palma africana de la que se produce biodiesel para mezclarlo con ACPM. Colombia, actualmente, mezcla 10% de etanol a la gasolina que comercializa el país y el porcentaje de biodiesel en la mezcla con el ACPM aumentará de manera progresiva, subiendo del 10% actualmente al 20% en 2012. No obstante, como lo indica el *Documento de Discusión Nacional acerca de los Asuntos Claves en el Análisis del Sector Agricultura*, los beneficios ambientales de tal tecnología no están claros y no han sido cuantificados de manera clara por los organismos encargados como el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

En la presentación en la Audiencia Pública sobre Biocombustibles al Congreso Nacional de Colombia, en mayo de 2008, Manuel Rodríguez Becerra, Profesor titular de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, presidente del Foro Nacional Ambiental, y ex-ministro de Medio Ambiente durante el mandato de César Gaviria, expuso las perspectivas negativas en razón de los biocombustibles como una opción para el desarrollo agrícola en Colombia.

BIODIESEL



FUENTE: CORPOICA, FEDEPALMA

REGIONALIZACIÓN

PALMA DE ACEITE

1. Zona Norte: Cesar, Magdalena, Urabá
2. Zona Central: Bolívar, Santander, Norte de Santander
3. Zona Oriental: Casanare, Meta, Cundinamarca
4. Zona Occidental: Nariño, Chocó

■ Departamentos priorizados

■ Municipios con mayores áreas de cultivo de Palma de Aceite

Según el ex-ministro, el principal argumento que esgrimió el gobierno Uribe para la justificación de la producción de biodiesel fue que esta contribuía a mejorar los índices de contaminación global, ya que la emisión de gases de efecto invernadero se veía disminuida en comparación con combustibles fósiles como el petróleo y el carbón. Cuando se utiliza este tipo de biocombustibles se disminuye el proceso carburante (de emisión de gases nocivos para el medio ambiente y la salud), en los vehículos que lo utilizan.



Agronegocios de Colombia.

No obstante, la producción del biodiesel como resultado del procesamiento de la palma africana tiene serios cuestionamientos durante su etapa inicial de cultivo. La llamada deuda de carbono, como es conocido el deterioro ambiental durante la etapa de cosecha de la palma, se conoce como el proceso en el que se incurre en deforestación, gasto de recursos hídricos y futuro desgaste del suelo.

Según los críticos de la producción de biocombustibles, el problema radica en que esta deuda debe ser tomada en cuenta para determinar las estadísticas de daño ambiental del proceso final, cuando el biodiesel está listo para la venta, lo cual involucra tanto el daño de la etapa de producción como su posterior daño en la etapa de consumo.

Sin embargo, dos investigaciones recientes, una liderada por Joseph Fargioni en 2008, y la otra por el Nobel de Química Paul Crutzen en 2007, muestran que a la fecha el balance ambiental en términos de gases de efecto invernadero (GEI) ha sido negativo.

En la primera investigación se hace un balance de los GEI en relación con los biocombustibles, tomando en consideración los impactos generados por la tala de bosques y transformación de diversos ecosistemas, tomando como ejemplo tres de los principales productores de palma: Indonesia, Malasia y Brasil.

En estos casos se tuvo en cuenta que la biomasa del bosque y del suelo almacena una significativa cantidad de carbono. Y al talar los bosques nativos para la adecuación de cultivos se emite CO₂ como resultado de la quema o la descomposición del carbono acumulado en la biomasa. Después de la rápida emisión de CO₂ producida como resultado de la destrucción del bosque, se registra un prolongado período de emisión de GEI, en la medida en que se descomponen las raíces y otros componentes de la biomasa del suelo.

El presidente del Foro Nacional Ambiental señala en su ponencia, que es contundente el resultado de la prueba al determinar que como efecto neto de la producción de biocombustibles se incrementa la emisión de CO₂ por décadas, e incluso siglos, en relación con las emisiones causadas por el uso de combustibles fósiles. Esto indica que en términos generales la producción de biocombustibles a largo plazo genera aún más daño al ecosistema y es nulo su impacto en la mejora del mismo.

El documento Conpes 3477 sobre el sector palmero dice explícitamente que Colombia no tumbará bosques para sembrar palma, pero Manuel Rodríguez señaló en el foro de biocombustibles ante el Congreso, que si lo que ya ha ocurrido es un buen indicio de lo que será la producción de biocombustibles a gran escala, la situación puede terminar degenerándose. “Si hoy en día hiciéramos el balance de los biocombustibles en

Colombia, en relación con lo que ya se ha deforestado en el Pacífico para hacer plantaciones de palma de aceite, el balance sería negativo”, dijo Rodríguez, citando unas investigaciones del Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), que muestran saldos negativos al respecto de la deforestación.

Otro de los aspectos preocupantes de la plantación masiva de cultivos de palma es la eliminación de otro tipo de cultivos utilizados para la subsistencia, hecho que puede, según varios expertos, llegar a amenazar la seguridad alimentaria, es decir, la capacidad de un terreno de producir suficiente cantidad de alimento para soportar a su población. Como ha mostrado Hedrix Gutiérrez Ibarguen, Consejero Superior de la Universidad Tecnológica del Chocó, en varias de sus investigaciones, en la zona del Urabá antioqueño y chocoano hay más cosechas de palma que de comida.

Libia Grueso, del PCN, recalca que entre los cultivos de coca y palma en el Pacífico se han ido menguando las reservas de alimento y las tierras dedicadas a su producción, lo cual en el pacífico ha causado una crisis por la falta de alimento, irónicamente en uno de los espacio más propicios para cultivos en el país.

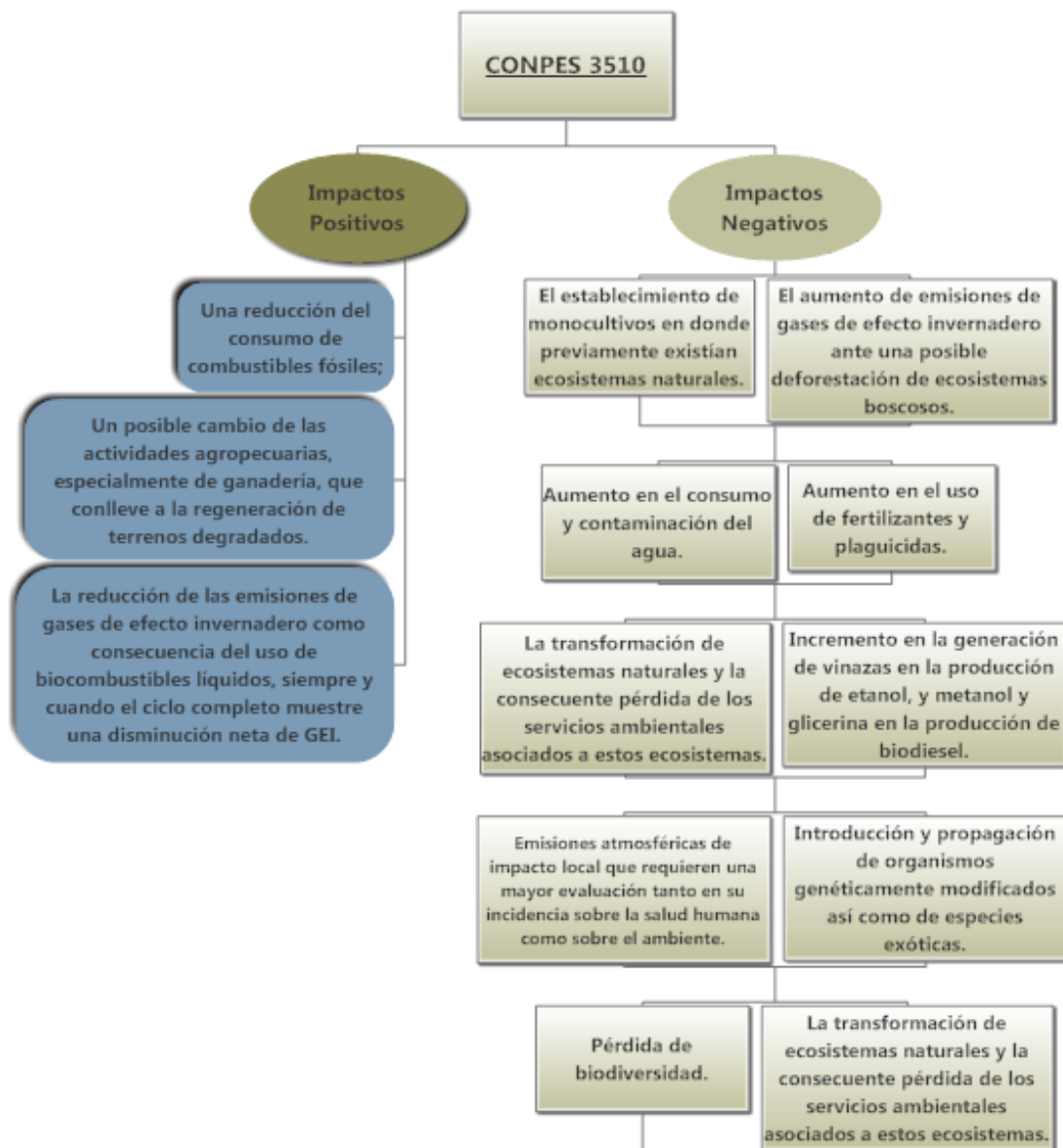
Grueso explica que una comunidad que se dedique a este cultivo únicamente, puede llegar a sufrir una crisis alimentaria, que ocurre al no encontrar espacio para plantar alimentos o en caso de una eventualidad extraordinaria como un desastre natural, queden inhabilitadas las vías de comunicación con los centros de comercio más cercano, dejando a la comunidad sin medios para subsistir.

La ONG *Chocó*, que es una iniciativa de la diócesis de Quibdó, ha denunciado la cada vez más generalizada muerte de menores y personas por desnutrición. Esta ONG aduce que está situación se ha debido a las restricciones de la fuerza pública de permitir el ingreso de alimentos, ya que asumen que irán para los grupos insurgentes. De igual manera el alimento que poseen las comunidades a veces es robado por estos grupos o en casos de catástrofes naturales pierden sus cultivos. Pero un factor determinante se refiere a la falta de cultivos destinados a la satisfacción de las necesidades alimentarias por el uso de las tierras cultivables para desarrollo de la palma o la coca.

A pesar de los señalamientos a los posibles efectos del cultivo masivo de caña y palma, el gobierno Uribe justificó su política con el comportamiento de la demanda mundial de biocombustibles y sus posibles beneficios económicos para las regiones cultivadoras. Este hecho se puede observar en el documento Conpes 3510 que define los “Lineamientos de Política para Promover la Producción Sostenible de Biocombustibles en Colombia”.

El documento Conpes se refiere a la demanda creciente que se ha venido presentando en Europa, la cual se ha observado en el viraje de políticas relativas a la industria de combustibles. Se han establecido metas en los porcentajes de mezclas de los combustibles fósiles con biocombustibles, siendo la meta vigente de 5.75 % al finalizar el año 2010 y se ha propuesto el 10 % para el año 2020, para su producción y utilización principalmente en los países industrializados. Esto significa que debido a la demanda creciente de naciones industrializadas del mejoramiento de los protocolos ambientales, las políticas verdes en función de la disminución de combustibles fósiles, y al creciente interés en la reducción de los gases efecto invernadero se ha incentivado el afán de importación de estos productos cuya demanda aún no ha sido suplida. Por lo cual en este caso Colombia se podría llegar a encargarse de suplir esa demanda sin evaluar concretamente las repercusiones que puede tener a largo plazo esta empresa.

Como indica el documento Conpes 3510, en términos generales, la producción de biocombustibles puede tener impactos tanto positivos como negativos sobre la biodiversidad y el medio ambiente.



Otro argumento que resulta llamativo para el gobierno es la capacidad de producir el biocombustible en territorio nacional, sin necesidad de la mediación exterior, a diferencia del petróleo y su subproducto la gasolina, que debe ser terminado en el exterior para volver a precios más altos debido al proceso de refinación y de transporte. En este caso el uso del motor diesel que puede ser utilizado con biodiesel sin ninguna adaptación o mantenimiento implica no tener que comprar la gasolina refinada de países extranjeros, lo cual encarece el valor de este producto, por biocombustibles producidos nacionalmente que acompañado de subsidios estatales, permite el uso de maquinaria pesada y en algunos casos vehículos de transporte a menores costos.

En Colombia, como indicó Manuel Rodríguez Becerra ante el Congreso de la República, aunque se esbozan los rendimientos benéficos de la producción de

biocombustibles, debido a la falta de preparación y el afán institucional de incursionar en estos productos para su exportación, se está incurriendo en casi todas las características de los impactos negativos señaladas por el Conpes.

Según la ponencia de este investigador, esta situación puede degenerar en una política agraria inadaptada a las realidades del sistema natural nacional, y de esta forma perjudicar a largo plazo a las comunidades campesinas que se adhieren al proceso productivo, pero no son conscientes de los impactos que generan sobre el terreno de cultivo.

De esta forma, en el transcurso de unos años, los campesinos palmeros se convierten en desplazados en potencia, aguardando las repercusiones naturales de la producción de la palma africana.

Ante las críticas hechas al cultivo de la palma, las empresas productoras y el Gobierno han promovido varias iniciativas como la *Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible*, que tienen como objetivo general promover el crecimiento y uso de sus productos de una manera económica y ambientalmente sostenible. Sumado a esto se ha propuesto, con el liderazgo del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y con el concurso de entidades y organizaciones del sector privado, nuevos mecanismos e incentivos con el fin de potenciar un mejor desempeño ambiental, en particular orientados a la conservación de ecosistemas y del recurso hídrico.

Si se tiene en cuenta que una plantación típica de palma requiere de casi 35 litros diarios de agua, y en cada hectárea se plantan, en promedio, 139 palmas, cada hectárea de palma aceitera consume al menos 4.753 litros de agua diariamente. En un año, las 360 mil hectáreas de palma existentes en Colombia, habrán gastado más de 624 mil millones de litros de agua. La Organización Mundial de la Salud recomienda el consumo de 80 litros de agua diarios por persona para las necesidades vitales e higiene personal, lo cual implica ingestión y aseo. En este caso cada hectárea de palma consume el agua de 59 personas en un día, y si se multiplica este valor por el número de hectáreas de palma sembradas en Colombia, el consumo de agua diario por hectárea es igual al que utilizarían 21 millones de personas cada día.

Como indican Elizabeth Bravo y Mae-Wan Ho, en su texto *Las nuevas repúblicas del biocombustible*, para los países y regiones productoras, los efectos del cultivo de palma pueden llegar a ser muy negativos: “(Los países con cultivos masivos) sufrirán la destrucción del bosque y la vegetación nativa, reduciendo la biodiversidad; los suelos sufrirán en cuanto cada plantación de palma cumpla su ciclo productivo y se

deba eliminar los troncos por métodos químicos; si las plantaciones se expandieran como se pretende, lo harían en desmedro de la seguridad y la soberanía alimentaria de las poblaciones locales, porque los agricultores dejarían de producir cultivos alimenticios para la población y en cambio se concentrarían en producir “combustibles limpios” para Estados Unidos y Europa”.

Ante estas críticas, tanto los empresarios como los interesados en la producción de los agro combustibles a nivel nacional e internacional tratan de explicar que a largo plazo y de manera sistemática los rendimientos irán mejorando y cada vez se cumplirá de mejor manera con los requisitos de conservación ambiental; sin embargo, las cifras son contundentes y los estudios científicos demuestran la ineficiencia actual del cultivo, que sumado a una gestión pública inadecuada, no permiten apreciar las bondades de este cultivo en el país.

IV



Implicaciones sociales, un secreto a voces

Sumario:

La siguiente entrega evalúa las repercusiones que ha tenido el involucramiento de empresarios, fuerzas armadas y grupos subversivos en la expansión territorial para la implementación de cultivos de palma africana en el contexto colombiano. El carácter particular de la expansión de este cultivo en el país ha venido acompañado de un factor claro y comprobado de violación a los derechos humanos en diferentes poblaciones, en las cuales se ha comprobado y demostrado que en algunos casos la expansión de dicho cultivo se ha manifestado a través de alianzas entre intereses económicos y de control territorial. En este caso se plantea la necesidad del Estado colombiano de evitar estas situaciones y reconocer los errores que se han cometido en cuanto a las afectaciones a poblaciones para replantear el papel del gobierno en el manejo de este cultivo.

Un aspecto fundamental que se entremezcla con el cultivo de la palma africana tiene que ver con la violencia ejercida por grupos armados que han promovido el cultivo indiscriminado de palma valiéndose de la violación sistemática de los derechos humanos, por medio de amenazas, coerción, asesinatos y masacres. En Colombia se han visto casos en que empresarios, delincuentes, e incluso miembros de la fuerza pública del Estado se han unido para violentar a la ciudadanía de zonas que son útiles para los fines del cultivo. Esta situación es de vital importancia al evaluar la viabilidad de la palma debido a que no sólo tiene que ver con el detrimento de los derechos civiles sino que está ligado al derecho fundamental a la vida.

Como señalan diferentes ONG tanto a nivel local como internacional, Colombia tiene una problemática de violencia que se ha caracterizado por el control paramilitar en las zonas que manejan este cultivo. Estos hechos han quedado retratados en las historias de las víctimas, en distintos medios de comunicación y hasta en tribunales internacionales como la Corte Interamericana de Derechos humanos, que explicó en sus sentencias cómo paramilitares en muchos casos actuando de la mano de las fuerzas armadas arrebataron a comunidades de sus tierras por medio de la extorsión, la amenaza, y el asesinato para que luego se formaran empresas productoras de palma.

El portal periodístico Verdad Abierta, ha expuesto la relación de bloques paramilitares como el frente Elmer Cárdenas, responsables de desplazamientos en la zona del Urabá antioqueño y Chocó, con el cultivo de la palma. “Todo este despojo ha

sido presentado por ‘El Alemán’ y los hombres de su Bloque como un proyecto de envergadura social llamado PASO, que busca generar empresas productivas en zonas alejadas. En realidad es parte de una estrategia de repoblamiento y control territorial cuyo eje es una agroindustria maderera y palmífera diseñada por Vicente Castaño”, señalan los redactores del portal en la sección “Victimarios” donde exponen la historia de los bloques paramilitares.

Jattam Mazzot Ilele es una víctima directa de este tipo de violaciones a los derechos humanos y a la propiedad privada, que han sufrido tanto comunidades indígenas como afrocolombianas en diversos rincones del país. Este afrocolombiano es actualmente el vicepresidente de Afrodes (Asociación de Afrocolombianos Desplazados), que vela por la reivindicación de sus territorios. Mazzot busca lo que él llama el saneamiento de sus tierras, que no significa solamente la obtención de los títulos de propiedad, sino una restitución simbólica, una limpieza espiritual que empiece por el gobierno, ofreciendo disculpas por los daños que él y su comunidad han sufrido.

Ilele denuncia cómo “los paramilitares en contubernio con el Ejército sacaron de sus tierras a las comunidades tanto negras como otras muchas que sufrieron de esta violencia” en el noroccidente del Chocó. Este defensor de los derechos de los desplazados recuerda cómo para los violentos “si no le pueden comprar las tierras a los dueños, entonces se la comprarán a las viudas”. Esta frase es supremamente significativa ya que evidencia la amenaza constante a la cual se han visto enfrentadas personas que por el simple hecho de habitar estos terrenos han visto violentada su integridad física y mental.

La situación en muchas regiones palmeras se ve agravada por el cruce de intereses de bandas de narcotráfico, organizaciones armadas subversivas o de delincuencia común, contrabando, tráfico de armas y desplazamiento de tierras para intereses tanto comerciales como estratégicos.

Uno de los casos más representativos en este sentido ha sido el de desplazados de los territorios colectivos de Curvaradó y Jiguamiandó (Chocó), quienes fueron expulsados de sus tierras por grupos paramilitares en 1996. Desde entonces la zona ha sido aprovechada por 14 empresas que desarrollan allí sembrados de palma africana y ganadería. Esto causó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos decretara medidas cautelares para que el Estado colombiano defendiera por todos los medios necesarios la vida de estos desplazados.



En el 2009, la Corte Constitucional también encontró violaciones a los derechos de estas personas y ordenó que el gobierno hiciera todo lo posible por restituir sus tierras y brindarles garantías para vivir tranquilos. La Defensoría del Pueblo consideró “necesario la realización de un censo de propietarios del territorio colectivo, a través de un proceso participativo de las comunidades de las cuencas de Curvaradó”, para así entregarles las 29.000 hectáreas que dictaminó la Corte debían ser restituidas. Sin embargo, al presentarse diferentes denuncias que ponían en duda la legitimidad de los reclamantes debido a sus alianzas con sectores palmeros, la Corte suspendió la entrega de las tierras. En este caso se encontró que algunos reclamantes eran trabajadores de empresas palmeras buscando restituir los territorios a los acusados.

La Corte definió que más de 29.000 hectáreas están ocupadas de forma ilegal por empresarios, 7.000 de las cuales están sembradas con palma, cuyos cultivos en algunos casos recibieron subsidios oficiales, y gozaron de protección de la Fuerza Pública. En 2010 se ordenó la captura de 22 directivos, dueños y empleados de nueve empresas palmicultoras que fueron fachada de los planes ilegales de Vicente y Carlos Castaño, jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia. Las firmas Urapalma, Palmas del Curvaradó, Selva Húmeda, Palmura, Inversiones Fregny Ochoa, Palmas de Bajirá, Palmadó, Palmas S.A. y Agropalma, están siendo investigadas por los delitos de desplazamiento forzado, concierto para delinquir e invasión de áreas de especial importancia ecológica, que podrían representarles penas de más de 20 años de prisión a varios de sus ejecutivos.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió en el 2003 que “desde el año 2001 la empresa Urapalma S.A. ha promovido la siembra de palma aceitera” de forma ilegal y “con la ayuda de la protección armada perimetral y concéntrica de la Brigada XVII del Ejército y de civiles armados”.

A pesar de las denuncias, algunos defensores de la producción de palma señalan que existen cifras contundentes como las del Censo General de Población del 2005, que demuestran a los municipios palmeros con una ventaja en vivienda, salud y educación, y que los casos de violencia son puntuales y no generalizados.

Una investigación de la fundación Seguridad y Democracia liderada por Alfredo Rangel, ha determinado por medio de análisis de estadísticas que de los principales 16 municipios palmeros (Acacías, Agustín Codazzi, Aracataca, Barrancabermeja, Cabuyaro, El Copey, El Retén, Paratebueno, Puerto Wilches, Río Viejo, San Alberto, San Carlos de Guaroa, San Martín, Tumaco, Villanueva y Zona Bananera), que abarcan tres cuartos de estos cultivos, en los pasados 17 años solo se han producido el 3.6% de los desplazamientos forzados en el país. Además, el 84% de todos los desplazamientos forzados en Colombia se han presentado en municipios donde no existen cultivos de palma africana, lo que según la investigación elimina la idea de una conspiración entre empresarios y fuerzas armadas para posicionar un latifundio palmero.

La investigación de Rangel revisó las cifras de violencia en el año 2006, y encontró que ese año ocurrieron 1.986 acciones violentas de las cuales sólo 45 ocurrieron en zonas palmicultoras, lo cual quiere decir que únicamente el 2.2% de las acciones violentas en el país pudieron o pueden relacionarse al cultivo palmero; esto indica que entre el 94% y 98% de las acciones armadas en el país ocurren en zonas donde no existe ni una sola hectárea de cultivos de palma africana. Así mismo, en un periodo evaluado entre 1998 y 2008, ha habido combates en 892 municipios del país, los cuales incluyen 62 donde existen cultivos de palma, lo que equivale al 7.1% del total de los municipios en conflicto.

Sin embargo, la investigación de Rangel, un personaje público que apoyó abiertamente al ex-presidente Uribe y sus políticas durante sus dos gobiernos, no pone en evidencia otra cara de las cifras, si se tiene en cuenta que para el 2006 había 96 municipios en Colombia con cultivos de palma africana. A partir de la estadística de Rangel, en la cual se mencionan 62 municipios que estuvieron involucrados en conflicto armado, se observa que aproximadamente dos de cada tres municipios palmeros sufren de una problemática de violencia, esté condicionada o no a la explotación de la palma

africana. La realidad del cultivo de palma en el país está enmarcada en que el 64,5% de los municipios palmeros sufren de situaciones de violencia. Estas cifras se ven disminuidas cuando se comparan con el grueso nacional que tiene más de mil municipios; sin embargo, al ser vistas en su contexto específico, demuestran que hay un conflicto violento real y evidente.

En este sentido es claro que el porcentaje de violencia es más extenso de lo que parece indicar el estudio de Rangel, aunque también es necesario tener en cuenta que las problemáticas en sectores palmeros muchas veces no están conectadas a este producto.

En cuanto al caso de Tumaco, en Nariño, se han podido observar tres formas de operar de los grupos armados: en primer lugar, el lavado de activos del narcotráfico, el control territorial de corredores estratégicos para el movimiento de estupefacientes y la reserva de la tierra como valor agregado. En este sentido el cultivo de la palma se relaciona con el conflicto armado en la medida que los grupos armados se apropian de las tierras ya sea a través de masacres, amenazas, secuestros y desplazamientos. Así mismo se apropian de los terrenos por medio de testaferros o de las empresas palmeras legalmente constituidas. Aunque en algunos casos la violencia está condicionada al proceso de extensión del cultivo de la palma, en otros casos es una coincidencia que los sectores palmeros sirven para otro tipo de negocios como lo es el narcotráfico.

Andrés Castro, de Fedepalma, acepta que este tipo de incursiones han ocurrido y que sí se han presentado violaciones a terrenos colectivos para la siembra de palma. Sin embargo, este gremio ha condenado en comunicados de prensa este tipo de actuaciones y ha dejado claro que empresas que han incurrido en este tipo de actividades no han pertenecido al gremio y se espera que sean llevadas a cumplir las restituciones por las autoridades competentes. En casos de empresas del gremio que se han visto implicadas en disputas de territorio (cuando terrenos baldíos se encuentran en disputas de terrenos colectivos), asegura que se espera que por las vías legales se determine si han incurrido en fallas, y que el gremio acatará las disposiciones que dicte la ley. De la misma forma, Castro asegura que en territorios en conflicto la palma actúa como una alternativa de cambio para antiguos cultivadores de coca y se presenta como una oportunidad para ejercer otro tipo de economía de sustento proveyendo de manera legítima cultivos que no son ilegales.

Tatiana Roa, de CENSAT, explica que por el contrario, la coca ha sido el comienzo de la cadena del despojo de los campesinos. “Es una estrategia, la coca se siembra para empezar el camino del despojo de la gente, es la forma como a la gente la

van sacando del territorio”, asegura Roa y agrega que de esta forma la coca genera las bases para que se desplace la gente y luego se pueda llegar con nuevos individuos a sembrar palma y no al contrario.

Esto tiene que ver con la manera de apropiarse de un territorio como lo entiende Roa, el hecho claro tiene que ver con la situación de violencia. Muchas veces la realidad involucra otros factores como el tráfico de estupefacientes y el cultivo de plantas sicotrópicas; no obstante, estas casualidades son sólo indicadores de una realidad que se prefiere mantener sellada. El cultivo de palma ha generado desplazamientos violentos, masacres y todo tipo de actividades de lesa humanidad a favor de un rendimiento económico. No se puede entender un cultivo de esta magnitud y de un desarrollo tan inusitado sin una motivación económica de fondo; no podemos propender por un modelo estable agropecuario que no esté pendiente de las repercusiones sociales que implica. En el contexto colombiano la palma está ligada a la violencia y en virtud de un beneficio monetario no se puede evadir u olvidar la responsabilidad de un Estado de garantizar la libertad y seguridad de sus habitantes.

V



Del consumo interno a los incentivos de exportación

Sumario:

La penúltima entrega del presente trabajo revela las falencias que actualmente presenta el modelo de políticas encaminadas al posicionamiento de los insumos del cultivo de la palma africana como producto de exportación y se evalúan así mismo los organismos creados por el gobierno para controlar el precio interno del mismo cuyo funcionamiento está ligado a la promoción de las exportaciones. Se exponen las posiciones encontradas que han dado cabida al conflicto entre los consumidores industriales nacionales que critican que el manejo de los recursos parafiscales sea manejado por el gremio de productores y los productores que defienden el actual modelo de medidas económicas que no favorece los precios en el mercado interno nacional.

Teniendo en cuenta la relevancia del cultivo de palma africana en la política agropecuaria y la importancia que tiene a futuro como cultivo bandera de las políticas de incentivos agropecuarios, se tiene que analizar de igual manera las repercusiones económicas que hasta el momento este cultivo ha tenido en la economía nacional, en el comercio exterior y en la industria colombiana. El cultivo de la palma ha tenido una repercusión masiva en todos los ámbitos de nuestra realidad nacional y de la misma forma para poder comprender a fondo el modelo propuesto por el gobierno, se tiene que evaluar la problemática económica.

Una figura que es altamente cuestionada por los gremios de aceites y grasas comestibles es el Fondo de Estabilización de Precios (FEP), una iniciativa nacida a partir de la apertura económica para posicionar los insumos de la palma como producto de exportación. Este organismo se creó con el fin de regular los precios del mercado interno, sin embargo, actualmente se ha visto envuelto en una lucha por parte de los consumidores nacionales contra las empresas productoras, que buscan su disolución.

Este fondo se enmarcó en la política impulsada desde 1998 por Fedepalma para que los productores exporten parte de su producción de aceite, como medio para regular la oferta local y lograr un mejor precio interno del producto, además de promover las exportaciones.

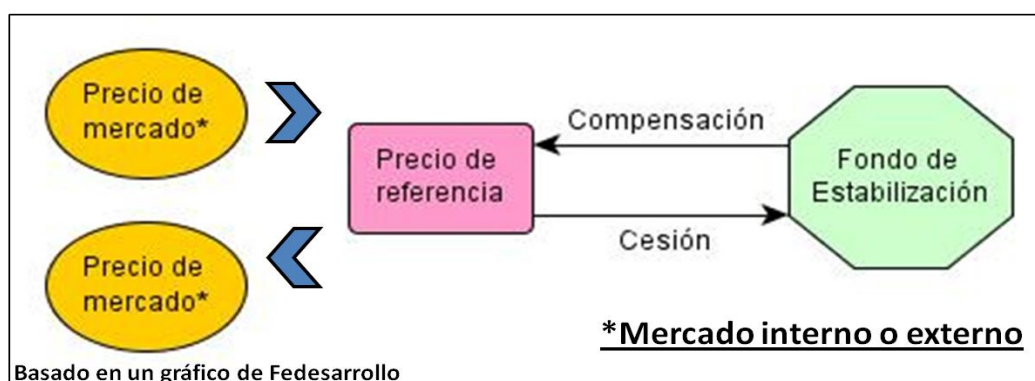
En la década de los noventas, este tipo de iniciativas demostraron cómo se podía regular el mercado y beneficiar en casos de excedentes de producción a los productores de palma, ya que cuando no tenían la posibilidad de exportar los bienes los precios caían

y en términos generales generaba pérdidas en el sector. De esta situación surgió la necesidad de crear un organismo que mejorara la regulación de la comercialización interna y que de igual forma ayudara a consolidar la estrategia sectorial de exportaciones.

El Fondo de Estabilización de Precios para el Palmiste, el Aceite de Palma y sus fracciones, nace a partir del decreto 2354 de 1996 modificado por el decreto 130 de 1998, adscrito a la ley 101 de 1993 como una cuenta de carácter especial, sin personería jurídica incorporada al Fondo de Fomento Palmero.

EL FEP es administrado por un comité directivo que está compuesto por Fedepalma, los Ministros de Agricultura y Desarrollo Rural y Comercio Exterior, además de cuatro representantes de los cultivadores de palma de cada zona palmera representativa del país.

El objetivo fundamental de este fondo es equilibrar los precios pagados al palmicultor por sus ventas en los mercados internos y de exportación. Las operaciones de estabilización pretenden optimizar el ingreso de los palmicultores procurando que las ventas en los dos mercados se realicen al mejor precio promedio posible. En este caso las ventas realizadas en el mercado con mayor precio deben pagar una “cesión de estabilización”, con las cuales el fondo retribuye a los palmicultores que hayan vendido en el mercado de menor precio, a los cuales se les otorga una “compensación de estabilización”, equilibrando de esta forma los precios pagados tanto en el mercado interno como en el de exportación.



Como explica Adriana Jiménez secretaria técnica del FEP, este fondo nace con tres objetivos principales:

- Procurar un ingreso remunerativo para los productores.
- Regular la producción.
- Promover las exportaciones.

Jiménez asegura que este fondo funciona como una forma de garantizar fundamentalmente que todos los productores reciban un ingreso equilibrado independientemente del mercado al que hayan vendido. En este caso existen 4 tipos de mercado a los que se vende el producto del aceite y para los cuales se define un precio base, conocido como precio de referencia, del cual se realizará si es el caso una cesión o una compensación. Los mercados son: Interno en Colombia; países de la CAN (Comunidad Andina de Naciones) con la excepción de Ecuador; Centroamérica y el Caribe, y un último que se define como resto del mundo. En este caso se calcula mensualmente de acuerdo al mercado internacional si los productores que vendan a cada mercado deberán realizar una cesión o si por el contrario recibirán una compensación. Jiménez explica que debido a que los precios del mercado internacional son volátiles, este fondo estabiliza fundamentalmente el ingreso de los productores y “es una medida a largo plazo”.

Este fondo es motivo de discordia para las industrias que utilizan el aceite de palma como materia prima en sus productos, debido al sobre costo que se genera en el precio de referencia que es el determinado para el mercado local y es impuesto por el FEP. Básicamente Fedepalma agrupa a los productores de palma y extractores de aceite y la contraparte, en este caso, engloba las empresas que por medio de procesos industriales transforma y utiliza el aceite.

En este caso lo que ocurre es que debido a la imposición del valor del precio del aceite de palma a nivel mundial, determinado por Malasia e Indonesia (los dos mayores productores), y a que el FEP tiene este valor en cuenta para fijar el precio de referencia al cual se vende el aceite de palmito en el mercado nacional, los precios aumentan para las industrias que lo compran, lo cual termina encareciendo el valor que pagan los consumidores en sus productos. Por ejemplo si el valor mundial de una tonelada de aceite de palma está fijado en 1000 dólares y en Colombia se produce a 800, a raíz del efecto del FEP en el precio de referencia, los industriales de las grasas y aceites comestibles terminan pagando un valor entre los dos, que no representa el costo real de la producción interna, sino que incluye este sobre costo.

Para Lina Fulladosa, directora ejecutiva de Asograsas (Asociación de la Industria Grasas y Aceites Comestibles), que reúne a grandes empresas como Alianza Team, Lloreda, Grasco y Del Llano, este tipo de medidas tienen que ir de la mano con una rendición de cuentas. Fulladosa explica que un fondo de estabilización debe servir para jalonar un sector en un determinado espacio de tiempo, pero que ayude a los

productores a adaptar sus procesos para que sean más competitivos y después no dependan de esta figura. De igual manera explica que en su opinión, el fondo no es útil actualmente, teniendo en cuenta que la producción de palma se ha reducido considerablemente lo cual bajo sus proyecciones no va a permitir tener excedente exportable debido a que el consumo interno utilizará la materia prima. Como indican proyecciones de Fedesarrollo sobre el tema el 88% de las ventas de aceite de palma en 2010 fueron al mercado interno.

Lina Fulladosa aclara que en 2010 se redujo el índice de exportación de un 40% en 2007 aproximadamente a un 12,2% en 2010, lo que indica que el mercado domestico está consumiendo el grueso de la producción de aceite de palma. Sumado a esto está la creciente demanda del aceite para la industria de biocombustibles que al ir de la mano con el descenso en las exportaciones demuestra que una medida como este fondo es ilógico cuando “no hay material para exportar”.

En el estudio de Fedesarrollo dirigido por Mauricio Reina en 2009, *Evaluación del Fondo de Estabilización de Precios para el Palmiste, el Aceite de Palma y sus Fracciones*, se reconstruye el proceso inicial del cultivo de palma que tenía como objetivo la sustitución de importaciones para satisfacer la demanda interna de aceites y grasas en el país. Según la investigación, la política de protección arancelaria a principios de los noventa, se enmarcó en un aumento de la oferta del aceite de palma que causó una caída en el precio de venta de los productores. De igual manera los excedentes, tenían una sola opción de exportación que estaba comprometida por la incapacidad de competencia con los valores internacionales, debido al alto costo de transporte y con ofertas ocasionales de montos pequeños. De esta forma las condiciones del mercado no eran aptas para la competencia en términos de exportación.

Los principales países exportadores de aceite de palma son Malasia e Indonesia, con niveles que superan los 10 millones de toneladas anuales. Colombia ha logrado ubicarse entre este grupo de principales exportadores con un volumen que en 2007 ascendió a 275.000 toneladas, en productos de la agroindustria de la palma de aceite, lo cual es significativamente bajo en comparación con los dos primeros. Sin embargo, como muestra Fedesarrollo, desde 2008 se empezó a evidenciar una tendencia a la baja que en 2010 llegó a tan solo 59 mil toneladas lo cual representa una caída de 78% en las exportaciones con respecto a 2007.

Como se había visto, en el mercado en 1996, cuando se crea el FEP, la capacidad de producción y el volumen de exportación eran mucho menores al actual, no

se habían dispuesto las exportaciones como el fin por excelencia de los insumos de la palma y Colombia no poseía la cantidad de cultivos ni de producción actuales. En ese contexto de hace 15 años, no solo era viable sino necesario este tipo de iniciativas para el posicionamiento del producto en el exterior.

Actualmente, teniendo en cuenta que los cultivos de palma se han triplicado y la producción de aceite de palma ha aumentado, la realidad es que las exportaciones están disminuyendo y por otro lado el consumo interno se ha disparado. Por esta razón agremiaciones del sector de grasas y aceites aseguran que el FEP ha quedado obsoleto.

Incluso Fedepalma expone en su documento *Visión y Estrategias de la Palmicultura Colombiana 2000-2020* que: “las exportaciones se convertirían en el principal destino de la producción nacional de aceite de palma (lo cual no está ocurriendo) y las zonas de libre comercio en las que participa Colombia se están ampliando, es altamente probable que el FEP, como está actualmente estructurado, antes del final del periodo haya cumplido su misión histórica”.

Sin embargo, para Jiménez, secretaria técnica del FEP, la respuesta para las críticas que suscita este fondo no debe ser su eliminación. Jiménez asegura que se debe establecer una reforma en la manera en que se calcula el precio de referencia (valor que se fija mensualmente para el mercado interno), el cual es fijado teniendo en cuenta los valores del mes anterior lo cual, según afirma, genera unas distorsiones en el mercado y el cálculo de cesiones y compensaciones. Para Jiménez la reforma fundamental que debe darse es realizar el cálculo del precio de referencia por mes vencido, para que de esa forma los cálculos estén representando la realidad minuto a minuto del precio a nivel internacional. Esto eliminaría las disparidades que se presentan en ocasiones y que causan que la cuentas del fondo tenga recursos de sobra o que estén en déficit, es decir un costo o beneficio para los productores que reciben dividendos en casos de superávit, pero que deben pagar las diferencias cuando se presenta déficit.

Este tema suscita opiniones encontradas ya que los productores que reúne Fedepalma, se sienten a gusto con la medida debido a que por medio del FEP pueden vender sus productos a mercados internacionales que actualmente pueden pagar mejores precios por el aceite de palma que las empresas locales, mientras que los consumidores industriales del aceite de palma, como son empresas de grasas y aceites y productos de alimentos, se sienten insatisfechos al seguir pagando excedentes al valor interno para soportar el subsidio a las exportaciones. Como explica Lina Fulladosa de Asograsas, debido a la falta de insumos se ha empezado a importar el aceite de palma de otros

mercados, y si se mantiene esta política de incentivos “el pronóstico del mercado de aceites y grasas es volverse importador”.

Además, basándose en estudios realizados por Fedesarrollo, explica que la importación de aceite de palma en bruto pasó de ser mínima a abastecer más de 50.000 toneladas en 2010, y que las importaciones de aceite refinado y sus fracciones han aumentado de 15.000 toneladas en 2007, a 60.000 toneladas en 2010. Esta medida refleja de esa forma el desabastecimiento de la producción nacional así como el aumento de la demanda interna, cuya explicación está enmarcada en la industria del biodiesel.

Como indica el estudio realizado por Fedesarrollo, en la medida en que esa financiación la termina pagando el consumidor y en cuanto que se espera que el sector no necesite apoyo indefinidamente para acceder al mercado internacional, debería haber cierta transitoriedad en el mecanismo, lo cual implica cambios estructurales al diseño del sistema parafiscal o a su eliminación.

De igual forma, este hecho se enmarca en un reciente cambio percibido por Mauricio Reina en el estudio, cuando entre el 2003 y el 2008 se presentó un cambio en el mercado de este tipo de productos con un auge de precios de los *commodities* (materias primas como el aceite crudo de palma), lo cual permitió cambios estructurales que reflejan hoy en día el cambio interno que sufrió el mercado, y que llevan a reevaluar el FEP a la luz de las nuevas condiciones que según Fedesarrollo “han cambiado sustancialmente”.

Como se muestra en este trabajo el FEP no es un mecanismo que se adapte a un periodo de crecimiento sostenido de los precios internacionales como el que se registró entre 2003 y 2008. En particular, el hecho de que el precio del mercado interno sea el precio paridad (que asume que los productos iguales en países distintos deben costar igual) de importación y la forma de cálculo del precio de referencia se base en las ventas históricas mes a mes, le resta capacidad al FEP para reflejar los cambios fundamentales que ocurren en los precios internacionales, lo cual redundará en un encarecimiento del valor que pagan los consumidores de aceite de palma.

Ante esto Adriana Jiménez asegura que es un problema que radica en la competitividad de las industrias como la de grasas y aceites. Jiménez afirma que ellos encarecen los precios de los productos que llegan al mercado nacional cuando el valor del aceite a nivel internacional crece, pero afirma que en momentos históricos en los que los precios han caído no ha redundado en un descenso de los precios de sus

productos en el mercado nacional. Esta funcionaria asegura que por el contrario como muestran las estadísticas del sector, los precios históricos de los productos manufacturados a base de insumos de aceite de palma han ido en subida constante.

Sin embargo, la industria de grasas también expone que aunque los precios del aceite de palma son más volátiles, de igual manera su tendencia al alza es evidente y ha sido constante, además, según explican, a diferencia de los alimentos perecederos los precios de los productos finales no pueden estar subiendo y bajando con el cambio del valor internacional de la materia prima, estos deben ser estables.

En este contexto, la existencia del FEP se justifica de manera temporal mientras se consolidan todos los factores que hacen del aceite de palma un cultivo promisorio.

Sin embargo, la política económica para el sector palmero plantea un dilema entre la promoción de exportaciones y el desarrollo de los biocombustibles.

Debido al mantenimiento actual del FEP, al desviar la cantidad de materia prima exportable redireccionándola hacia la producción de biodiesel, se está poniendo en riesgo la capacidad competitiva de la industria de aceites y grasas nacional y se está evitando la exportación de productos con valor agregado, eso sin tener en cuenta las repercusiones al valor interno, que causa que los consumidores terminen subsidiando los biocombustibles. Según critica en su estudio Fedesarrollo “la producción de aceite de palma no ha crecido al ritmo que se proyectó en 2007 cuando se hicieron ajustes a la política para el sector en relación con los biocombustibles”.

Ante esto Adriana Jiménez del FEP asegura que la producción es constante y se encuentra al alza, lo cual permitirá que haya producción para una y otra industria sin problemas de que vaya a faltar materia prima, y explica que en los pasados años cuando se ha disminuido la producción, esto ha respondido a la enfermedad de la pudrición del cogollo y debido a esto hubo momentos de crisis, pero actualmente todo está estable e “incluso se están presentando en este año (2011) los índices de producción más altos en la historia del cultivo”.

Este argumento es refutado por la industria de grasas y aceites comestibles como muestran las indicaciones de Lina Fulladosa anteriormente, e incluso explica que “las proyecciones no solo propias sino también de Fedesarrollo, han mostrado que se va a presentar una insuficiencia de materia prima para cubrir la demanda interna y también exportar”. Para esta directora ejecutiva el problema no radica solo en el tema de subsidios y aranceles, sino en general en la política agropecuaria, que ha demostrado que toda la inversión y el apoyo institucional y financiero que se le ha prestado a esta

agroindustria no ha generado rendimientos positivos en el sector, que fuera de una extensión territorial e incremento de hectáreas cultivadas, no se ha visto una mejora en la producción ni en los rendimientos, Fulladosa afirma que “no se trata de cantidad sino de calidad”.

Como observamos, el cambio en los pasados ocho años ha sido repentino y ha obedecido a una serie de decisiones institucionales direccionadas por el plan de desarrollo agropecuario impulsado por el ex-presidente, siendo en este caso la razón de los reclamos por parte de las industrias nacionales para eliminar esta iniciativa parafiscal que, como indicaba Fedepalma, “ya ha cumplido su misión histórica”.

VI



El cultivo insignia del gobierno de Uribe

Sumario:

La última entrega del presente trabajo se enmarca en el análisis de las políticas impulsadas por el gobierno del ex-presidente Álvaro Uribe Vélez para promover extensivamente el cultivo de la palma africana en el país, como una medida para contrarrestar el desempleo, impulsar la producción de biocombustibles y posicionar la industria en el mercado internacional. Se enumera de manera cualitativa y cuantitativa la inversión y promoción de medidas a favor del cultivo y de igual forma se plantea este desarrollo estratégico de direccionamiento hacia una política agrícola enfocada en la producción de palma africana, como un elemento de importantes repercusiones a largo plazo en materia política, económica y social, así como un compendio de medidas que tienen una necesidad de análisis y seguimiento para su correcta implementación y desarrollo.

Durante el mandato de Álvaro Uribe, la palma africana se constituyó en el cultivo emblema de su administración llevando a Colombia a posicionarse como el productor número uno en Latinoamérica y el cuarto a nivel mundial. Colombia actualmente posee más de 360.000 hectáreas registradas ante el Ministerio de Agricultura. En 2002 la producción de aceite de palma oscilaba en 1.4 millones de toneladas mientras que su consumo se encontraba en 1.6 millones. Se tiene por cifras de Fedepalma que para 2005 la producción aumentó a 1.8 millones de toneladas y el consumo a 2.2 millones de toneladas. Así mismo las exportaciones del aceite de palma se duplicaron, pasado de 112.000 toneladas en 2002 a 247.000 toneladas en menos de 4 años.

Sin embargo, este crecimiento no es producto fortuito del desarrollo del cultivo en la nación, sino que ha estado acompañado de una incesante inversión por parte del gobierno que ha estimulado incentivos, como las exenciones fiscales, los créditos bancarios y ha direccionado el presupuesto del Ministerio de Agricultura para lograr este cometido.

Como se puede observar en un aparte del documento de *Ejecución presupuestal a marzo 2010* del Ministerio de Agricultura, el presupuesto total del Ministerio fue de más de 1.7 billones de pesos, de los cuales se adjudicaron 491 mil millones para el programa Agro Ingreso Seguro (AIS) impulsado por el ministro Andrés Felipe Arias

durante el mandato de Uribe. Según las ejecuciones de créditos de Finagro, que entrega el dinero dispuesto por el Ministerio, se encuentra que más de 200 mil millones de pesos de este presupuesto han ido hacia el fortalecimiento del cultivo de la palma, lo que representa cerca de la mitad del presupuesto del programa AIS.

Para situar en contexto la cifra antes mencionada, la inversión que hizo el Ministerio de Educación en 2010 en materia de educación superior, fue de cerca de 100 mil millones de pesos para el sistema universitario público de toda la nación, lo cual equivale aproximadamente a la mitad de lo invertido en el apoyo a la palma.

En este sentido queda claro que para el gobierno Uribe la inversión en agro, y más específicamente en palma africana, fue fundamental para la visión del desarrollo del país. Una de las metas del gobierno era solucionar a largo plazo la inestabilidad rural con el incentivo a productos como la palma africana, como lo mencionó el ex ministro Andrés Felipe Arias en más de una presentación pública.

Estas medidas se pueden evidenciar en la aprobación de varias leyes y decretos como la Ley 939 el 31 de diciembre de 2004, en la que se obliga a usar biodiesel de palma en Colombia a partir del 1 de enero de 2008. En dicha ley, además, se establecen exenciones fiscales, como la del impuesto sobre la renta líquida para nuevas plantaciones de cultivos de tardío rendimiento como la palma o el caucho, y la exención en el IVA y en el impuesto general de combustibles para el biodiesel de palma aceitera. Sumado a esta iniciativa se profirió la resolución 351 de 2005 del Ministerio de Agricultura, que reglamenta los procedimientos para la inscripción y registro de cultivos de tardío rendimiento, con miras a la exención sobre la renta tributaria.

Desde hace una década, en el marco del Plan Colombia, se ha pretendido sustituir plantaciones de cultivos ilícitos por palma africana en todo el país. Esta medida ha sido incluida en los requerimientos del TLC con los Estados Unidos, que entre otras cosas busca aumentar la exportación de materias primas para la manufactura de biocombustibles. Según algunos ambientalistas, lo anterior resulta preocupante por el creciente interés estadounidense de reproducir y condicionar cultivos de este tipo, evitando de esta forma incentivar la producción de palma en su propio territorio.

La ONG Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, afirma en el documento *Agronegocios de palma y banano en el Bajo Atrato, Impactos ambientales y socioeconómicos* que “lo cierto es que de las materias primas de las que se pueden generar biocombustibles, algunas son propias de países tropicales y solo en ellos se dan, como la caña de azúcar o la palma africana, y otras se pueden dar tanto en los países

tropicales como en los países de climas templados, tales como la colza, el girasol, el maíz, la remolacha, etc”. De ahí nace la necesidad de promover los cultivos de palma africana en territorios como Colombia. De igual manera este modelo de sustitución de carburantes supone un beneficio, ya que con los biocombustibles no hay que cambiar los motores usados en el transporte en la actualidad, ni tampoco la infraestructura de distribución, lo cual significa a largo plazo un menor gasto en la transición de los combustibles fósiles a los biocombustibles.

El Plan Colombia contempla la siembra de 34.000 hectáreas de palma de aceite en cinco años con un costo total de un poco más de 200.000 millones de pesos. Este apoyo que brinda el gobierno para el establecimiento de nuevos cultivos está representado por el Incentivo de Capitalización Rural que implica la entrega de un subsidio de entre 1.500 y 4.000 SMV (salarios mínimos vigentes) para financiar nuevos proyectos, preferiblemente de palma.

Para Fabio Lozano, Coordinador del Proyecto de Prevención y Protección de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), el modelo de la agroindustria de la palma se encuentra dentro del marco de la economía internacional como la base de los biocombustibles para garantizar energía para el consumo. Esta idea fue promovida por el gobierno de Uribe por medio de “importantísimos subsidios para este cultivo”.

El cultivo de palma se ha convertido en una parte fundamental de la economía colombiana, ya que ha reconfigurado los espacios cultivables, generando repercusiones tanto para las poblaciones locales, las industrias agrónomas, la economía nacional y las relaciones comerciales internacionales. Además, en la actualidad la palma representa el 5% del PIB (producto interno bruto) del sector agrícola y el 9% del producto de los cultivos permanentes.

El ex presidente Álvaro Uribe impulsó una serie de transformaciones sociales y económicas a través de su proyecto de constitución de la palma africana como bandera colombiana en el mercado exterior. El cultivo ha generado polémicas en temas ambientales, sociales y de violencia, de producción de biocombustibles, e incluso ha suscitado peleas internas entre empresarios del sector. La palma se ha convertido en ocho años en un actor importante de la realidad colombiana, y en punta de lanza del proyecto de desarrollo agropecuario nacional, al punto que se ha visto beneficiado a

niveles de exención de impuestos y cesación de contribuciones fiscales, llegando incluso a acaparar el grueso del presupuesto de ministerios como el de Agricultura.

Sin embargo, la situación actual del proceso de proliferación del cultivo de palma se ha visto envuelto en (i) inusuales controversias que involucran un ex ministro en razón de la entrega de créditos agrarios; (ii) desplazamientos forzados y violencia en Córdoba, Antioquia y Nariño; (iii) daños ambientales ya documentadas en el Chocó y la Orinoquía; e incluso (iv) controversias alrededor de los organismos promotores del posicionamiento de la palma a nivel internacional.

Pero las principales reflexiones que debe producir este tema involucran sus repercusiones a largo plazo. En este caso, se deben sopesar los efectos tanto sociales como medioambientales que puedan generar en unos años los cultivos de palma africana. Y cabe preguntarse si vale la pena un periodo de bonanza generacional que, aunque signifique unos rendimientos económicos positivos por un periodo de 20 a 30 años, pueda resultar en afectaciones estructurales en el medio ambiente y en la economía, que experimentarán las generaciones siguientes.

Colombia se encuentra en una encrucijada. La posición del gobierno nacional y de grupos empresariales, es la de asumir este modelo agroindustrial como una solución a largo plazo para la economía y el desempleo; por otro lado se encuentran las organizaciones no gubernamentales y los activistas, que aseguran que el mismo produce afectaciones tanto ambientales como sociales y en algunos casos de violaciones a los derechos humanos. En el caso del cultivo de la palma se deben evaluar todas estas variables, y es labor de las entidades estatales corregir el rumbo de sus políticas si es que se prevé necesario. La realidad es que ya existen cientos de miles de hectáreas en producción y miles más en etapa de desarrollo, lo cual indica que este modelo independiente de que haya sido consultado o no y de que sea viable o inviable está aquí para quedarse; surge la necesidad de plantear nuevas alternativas y de fomentar el desarrollo incluyente que no atropelle las libertades individuales de los involucrados. Lo demás está por verse.

Bibliografía del trabajo de grado La palma africana: Encrucijada nacional del nuevo siglo

Documentación física, libros y reportes:

- Codhes informa, Boletín informativo de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento. *¿Salto estratégico o salto al vacío? El desplazamiento forzado en los tiempos de la seguridad democrática*. Número 76, Bogotá, 27 de enero de 2010.
- Codhes informa, Boletín informativo de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento. *¿Consolidación de qué? Informe sobre desplazamiento, conflicto armado y derechos humanos en Colombia en 2010*. Número 77, Bogotá, 15 de febrero de 2011.
- Conto Posada, Myriam. *Financiamiento de los agricultores al desarrollo tecnológico, naturaleza jurídica e impacto en el sector palmero colombiano*. Editorial de la universidad del Rosario, Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (FEDEPALMA), 2008.
- Reina, Mauricio. Zuluaga, Sandra. *EVALUACIÓN DEL FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS PARA EL PALMISTE, EL ACEITE DE PALMA Y SUS FRACCIONES*. FEDESARROLLO. Bogotá, 2009.
- Reina, Mauricio. Zuluaga, Sandra. *Elementos para modificar el fondo de estabilización de precios para el palmiste, el aceite de palma y sus refracciones*. Bogotá, 2011.
- Rodríguez, María Clara. Carrizosa Umaña, Ana. Reyes Schloss, Gustavo. Giraldo, Juan Carlos. Noppe, José Guillermo y Rengifo Sergio. *Las Alianzas Productivas Estratégicas en palma de aceite, un modelo vigente, con resultados importantes, pero que requiere ajustes para asegurar su sostenibilidad*, USAID Fedepalma SNV CECODES. 2010.
- Rodríguez, María Clara. Carrizosa Umaña, Ana. Bonell, Carlos y Rengifo Sergio. *De las Alianzas Productivas a los Negocios Inclusivos, Guía de Mejores Prácticas para la implementación de Negocios Inclusivos en palma de aceite*, USAID Fedepalma SNV CECODES. 2010
- *The humanitarian tragedy of the colombian pacific region*, International Group for indigenous affairs, IWGIA, proceso de comunidades negras PCN, colectivo de trabajo Jenzera, 2008.
- *La regla fiscal para Colombia*, Debates de coyuntura económica y social. Fedesarrollo, 2010.
- Pérez Rincón, Mario. Álvarez Roa Paula. *Deuda social y ambiental del negocio de la caña de azúcar en Colombia*. Grupo semillas, 2009.

- Seeboldt, Sandra y Salinas Abdala, Yamile. *Responsabilidad y sostenibilidad de la industria de la palma, ¿Son factibles los Principios y Criterios de la RSPO en Colombia?*, Oxfam Novib-Indepaz. Bogotá, 2010.
- *El agronegocio de la Palma Aceitera en Colombia. ¿Desarrollo para las poblaciones locales o una crónica para el desastre?*, Revista No. 34/35. Grupo Semillas. Colombia, 2008.
- *Fondo de estabilización de precios para el palmiste, el aceite de palma y sus fracciones*. Fedepalma, Secretaría técnica, 2006.
- Rangel Alfredo, Ramírez Tobón William, Betancor Paola Andrea. *La palma africana: mitos y realidades del conflicto*. Fundación seguridad y democracia, Bogotá junio de 2009.
- *Visión y estrategias de la palmicultura colombiana: 2000-2020, Lineamientos para la Formulación de un plan Indicativo para el desarrollo de la Palma de Aceite*, Fedepalma, Bogotá, 2000.
- Pronunciamiento público de Fedepalma frente a los desarrollos irregulares de palma de aceite en el Urabá chocoano. Fedepalma 2010.

Documentación procurada en la WEB:

- Fedepalma, *Centro de documentación – Proceso agroindustrial*, consultado en: www.fedepalma.org.
- Fedepalma, *Fondos para fiscales*, consultado en: www.fedepalma.org.
- El Espectador, “*Ley de tierras podría prestarse para el lavado de activos*”, 23 octubre, 2006. Consultado en www.elespectador.com.
- Caracol radio, ECONOMÍA, *El gobierno asegura que la "Ley de tierras" no legaliza predios de los Paramilitares*, Entrevista al ministro de Agricultura. Octubre 21 de 2006. Consultado en www.caracol.com.co.
- Revista SEMANA, *Advierten sobre costo por despojo de tierras en Colombia*, Sección DESPLAZAMIENTO, viernes 24 Abril 2009. Consultado en www.semana.com.
- La Silla Vacía, *Esta es la genealogía de la palma en el gobierno de Álvaro Uribe* – 30 de marzo 2009, consultado en: www.lasillavacia.com.
- La Silla Vacía, *Tumaco, con menos palma y mal con tanta coca* – 13 de abril 2010, consultado en: www.lasillavacia.com.

- La Silla Vacía, *Colombia no es un problema para el calentamiento global*, consultado en: www.lasillavacia.com.
- La Silla Vacía, *¿Podrá ser una solución?* – 7 de diciembre 2009, consultado en: www.lasillavacia.com.
- La Silla Vacía, *Palma, ingreso seguro* – 6 de octubre 2009, consultado en: www.lasillavacia.com.
- La Silla Vacía, *¿Un cultivo ilícito, eficiente y democrático?* -27 de marzo 2009, consultado en: www.lasillavacia.com.
- Concepto del Procurador General de la Nación, Edgardo Maya, sobre la Ley de Desarrollo Rural, presentada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 2006. Consultado en: www.procuraduria.gov.co.
- Revista SEMANA, *Las tierras perdidas*, febrero de 2006, consultado en: <http://www.verdadabierta.com/paraeconomia/197-las-tierras-perdidas>.
- Listado de ONG`s: www.ecoportal.net, www.alainet.org, www.biodiversidadla.org, www.soitu.es, www.nodo50.org, www.revistapueblos.org, www.librered.net, www.grain.org.
- *Biocombustibles: un desastre en potencia*. Declaración de la Convención Marco sobre Cambio Climático. Diciembre, 2006. Firmado por 173 organizaciones internacionales. Consultado en: http://www.censat.org/A_A_Noticias_Nacionales_416.html.
- Houtart, Francois. La palma africana. Consultado en: <http://www.ecoportal.net/content/view/full/61229>.
- Houtart, François, Costo social de los agrocarburos, El caso de la palma africana en Colombia, 2007-10-25. Consultado en: <http://alainet.org/active/21450&lang=es>
- Gutiérrez Ibarguen, Hendrix. *La consolidación de la seguridad democrática*. Consultado en: <http://www.choco.org/index.php?name=News&file=article&sid=371>
- Businesscol.com, *XVII Agroexpo cierra cumpliendo expectativas*, 2009-07-27. Consultado en: <http://www.businesscol.com/noticias/fullnews.php?id=7026>
- Buitrón, Ricardo, Acción Ecológica, *Monocultivos de palma aceitera : Impactos en Colombia y Ecuador*, 25 junio del 2001. Consultado en: <http://www.ecoportal.net/content/view/full/23653>
- Mondragón, Héctor. *Colombia: Triste historia y triste futuro del negocio de la palma aceitera, fragmento de “Colombia, caña de azúcar y palma aceitera, biocombustibles y relaciones de dominación ”, que apareció en el Boletín de la*

Red por una América Libre de Transgénicos , número 289, 29 de noviembre de 2007. Consultado en: <http://www.biodiversidadla.org/content/view/full/50952>

- Redondo, Eugenia, *Los mártires de la palma africana*, 16-10-2008. Consultado en: http://www.soitu.es/soitu/2008/10/16/actualidad/1224148622_638645.html
- Jerez, César. *Colombia: Estado delincuente, intervención imperial y palma africana*. La Haine - Martes.18 de julio de 2006. Consultado en: <http://www.nodo50.org/tortuga/Colombia-Estado-delincuente>
- Palma: ¿Hasta cuando maldita?, 3 diciembre 2009, Revista ambiental Catorce6. Consultado en: <http://www.catorce6.com/1518/palma-%C2%BFhasta-cuando-maldita/>
- *Un camino Llano para la palma*, 30 noviembre 2009, Revista ambiental Catorce6. Consultado en: <http://www.catorce6.com/1556/un-camino-llano-para-la-palma/>
- ‘*Vamos por el camino de la sostenibilidad*’. 30 noviembre 2009, Revista ambiental Catorce6. Consultado en: <http://www.catorce6.com/1564/>
- Kucharz, Tom. *Palma de muerte: un arrasamiento de tierras a sangre y fuego*, Viernes 30 de septiembre de 2005. Consultado en: <http://www.revistapueblos.org/spip.php?article271>
- Revista Palmas, Volumen 24 No. 3 – 2003, *Plan Indicativo del Gobierno para el sector Palma de Aceite: Una necesidad imperiosa para el desarrollo exitoso de esta actividad*. Consultado en: http://www.fedepalma.org/palmas/24_3.shtm#edit
- *Investigación e Innovación Tecnológica en Palma de Aceite* “La palma es redentora social de Colombia” dice Álvaro Uribe. Consultado en: http://www.cenipalma.org/es/uribe_en_conferencia_palma
- Arellano Ortiz, Fernando, “Con Ley De Desarrollo Rural, Gobierno de Uribe pretende despojar territorios a indígenas”, 2007-09-06. Consultado en: <http://alainet.org/active/19467&lang=es>
- Rosas Landa, Octavio. *Palma aceitera en Colombia - ¿Paramilitarismo sustentable?*, 16 octubre 2007. Consultado en: <http://www.grain.org/biodiversidad/?id=372>
- Águila Rubín, Marcela. “Palma africana: del ensueño a la pesadilla”, 21 de julio de 2005. Consultado en: http://www.swissinfo.ch/spa/index/Palma_africana:_del_ensueno_a_la_pesadilla_.html?cid=4628646

- *¡Paremos la fiebre de los agrocombustibles!*, Revista Biodiversidad, sustento y culturas No 54, 20-12-07. Consultado en: <http://www.ecoportal.net/content/view/full/75077>
- *EL 'CONTAMINADO' CAPÍTULO AMBIENTAL DEL TLC*, Red Colombiana de Acción Frente al Libre Comercio y el Alca, Recalca. Marzo, 2007. Consultado en: <http://www.moir.org.co/EL-CONTAMINADO-CAPITULO-AMBIENTAL.html>
- *EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A MARZO 2010 EN PESOS*. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, DIRECCION DE PLANEACION Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL, Consultado en: <http://www.minagricultura.gov.co/archivos/ppto-madr-marzo-2010.pdf>
- *Fedepalma – Fondos para fiscales*, consultado en: www.fedepalma.org.
- Elizabeth Bravo y Mae-Wan Ho. *Las nuevas repúblicas del biocombustible*, Red del Tercer Mundo 30, Montevideo, 12 de junio de 2006). Consultado en: <http://www.ecoportal.net/content/view/full/61668>
- *Documento de Discusión Nacional acerca de los Asuntos Claves en el Análisis del Sector Agricultura (Mitigación). Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo* (PNUD). Consultado en: http://www.pnud.org.co/img_upload/61626461626434343535373737353535/C_AMBIOCLIMATICO/3.%20Memorias%20Di%C3%A1logo%20Nacional%20Interministerial%20sobre%20cambio%20clim%C3%A1tico%20en%20el%20sector%20agropecuario/2DocdiscusionAgriculturayMitigacionColombia.pdf
- *Agrocombustibles “Llenando tanques, vaciando territorios”*. CENSAT Agua Viva y El Proceso de Comunidades Negras en Colombia PCN, 2008. Consultado en: www.agrocombustiblescolombia.org
- *Colombia: ¿la redención o el infierno para el Chocó Biogeográfico? Palma aceitera en los territorios de las comunidades negras de Jiguamiandó y Curvaradó, Chocó*. CENSAT Agua Viva - Centro Nacional Salud Ambiente y Trabajo. Consultado en: http://www.censat.org/A_A_Documentos_112.htm
- Garay, Luis Jorge. Barberi Gómez, Fernando. Perry, Santiago. Ramírez, Clara. Vargas, Fernando. *Cuantificación y valoración de las tierras y los bienes abandonados o despojados a la población desplazada en Colombia*. Comisión de seguimiento a las políticas públicas sobre desplazamiento forzado, Bogotá, enero de 2011. Consultado en: <http://www.nrc.org.co/docs/XIinformecomisiondeseguimientopppdeno2009.pdf>
- *Agronegocios de palma y banano en el Bajo Atrato, Impactos ambientales y socioeconómicos*. Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, 2007. Consultado en: <http://www.pasc.ca/es/article/agronegocios-de-palma-y-banano-en-el-bajo-atrato-impactos-ambientales-y-socioecon%C3%B3micos>

- Además un seguimiento de todas las noticias que tuvieron relación a los cultivos de palma africana en el periodo 2002 a 2010 en los medios impresos, *El Tiempo* y *SEMANA*.

Documentos oficiales:

- Documento Conpes 3510. *LINEAMIENTOS DE POLITICA PARA PROMOVER LA PRODUCCION SOSTENIBLE DE BIOCOMBUSTIBLES EN COLOMBIA*, Consejo Nacional de Política Económica y Social. Colombia, Bogotá, marzo 31 de 2008.
- Documento Conpes 3477. *ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO COMPETITIVO DEL SECTOR PALMERO COLOMBIANO*, Consejo Nacional de Política Económica y Social. Colombia, Bogotá, 9 de julio de 2007.
- ARIAS LEIVA, ANDRÉS FELIPE. *PLAN ESTRATEGICO, INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA*. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. PERIODO INFORMADO AÑO (S) 2006-2010.
- *Por medio de la cual se crea e implementa el programa “Agro, Ingreso Seguro – AIS*. LEY 1133 DE 2007. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Diario Oficial No. 46.595 de 10 de abril de 2007.
- *PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN EN MILLONES DE PESOS DE CADA VIGENCIA*. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. VIGENCIAS 2000 AL 2010
- *EJECUCIÓN PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN POR SECTOR 2010*, GOBIERNO CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, 2010.
- *EJECUCION PRESUPUESTAL VIGENCIA DE 2010 EN PESOS*. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. DIRECCIÓN DE PLANEACION Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL, 2010.
- *INFORME AL CONGRESO - ÁLVARO URIBE VÉLEZ*. Presidencia. Documento elaborado por Departamento Nacional de Planeación-DNP-. Imprenta Nacional Julio de 2009.
- Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Políticas y Programas Misionales » *Empresarización de actividades agropecuarias* » Biocombustibles. Consultado en: <http://www.minagricultura.gov.co/02componentes/05biocombustible.aspx>

Presentaciones digitales:

- Presentación en powerpoint. *Agro Ingreso Seguro* de Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural Andres Felipe Arias, 2007.

- Presentación en powerpoint. *Política Nacional de Biocombustibles FERIA Expodesarrollo 2009* de Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Andrés Darío Fernández Acosta, 2009.
- Rodríguez Becerra, Manuel. *¿Cuáles son los factores de sostenibilidad o insostenibilidad ambiental de la producción de biocombustibles en Colombia?*. Presentación en la Audiencia Pública sobre Biocombustibles, Congreso Nacional de Colombia, Mayo 2008.
- Presentación en powerpoint. ROJAS, MAURICIO. *EVALUACION DEL FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR DIESEL CON BIODIESEL DE PALMA (PME)*. CHALMERS - Universidad Tecnológica Gotemburgo, Suecia, 2006. CENIPALMA Octubre 31 de 2007.

Trabajos universitarios:

- Sergio Becerra Cuervo, Monografía de grado, Palma Africana y Deforestación, , Ciencia Política, Universidad de los Andes, 2008.
- Ocampo, Valencia Sebastián. Agroindustria y conflicto armado: el caso de la palma de aceite. Monografía para optar al título de politólogo, Departamento de ciencia política, Universidad de los Andes, 2009.

Entrevistas personales:

- Entrevista a Efraín Jaramillo director de la ONG, Grupo Jenzera.
- Entrevista a Fabio Lozano coordinador proyecto de prevención y protección de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES).
- Entrevista a Tatiana Roa coordinadora de proyectos en el Centro Nacional Salud Ambiente y Trabajo (Censat).
- Entrevista a Libia Grueso activista del Proceso de Comunidades Negras (PCN).
- Entrevista a Paula Álvarez coordinadoras de la ONG Grupo Semillas.
- Entrevista a Andrés castro coordinador del área de Responsabilidad Social de Fedepalma.
- Entrevista a Adriana Jiménez secretaria técnica del FEP, Fedepalma.
- Entrevista a María del Mar Maldonado, ingeniera ambiental de Ingenios Manuelita.
- Entrevista a Jattam Izot Ilele vicepresidente de la Asociación de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes).
- Entrevista a Lina Fullados directora ejecutiva de la Asociación de grasas y aceites comestibles de Colombia (ASOGRASAS).

Imágenes: Cortesía Indupalma, Fedepalma, JMD industrias, Matiz, Agronegocios de Colombia, Ecoportal.